

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

Reconocimiento de validez oficial de estudios de nivel superior según acuerdo secretarial 15018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos

MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA



CONCEPTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, A PARTIR DE SU GÉNESIS Y EVOLUCIÓN

Desde la Constitución de 1917 hasta la reforma en 2016

Trabajo recepcional que para obtener el grado de

MAESTRO EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Presentan: ***Herman Luis García Salcido***

Tutora: Ana Sofía Torres Menchaca

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. junio de 2018.

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un análisis del génesis, evolución y concepción del derecho a la educación, a partir de una reflexión al artículo primero constitucional, en relación a los tratados internacionales en la materia. Al mismo tiempo, se revisan las reformas constitucionales del Derecho a la Educación en México, así como una revisión de las sentencias emitidas por tribunales locales y de otros países. Finalmente, se ponen en diálogo los aspectos jurídicos del Derecho a la Educación, con la Ley General de la Educación, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

AGRADECIMIENTOS

Como comenta acertadamente Katarina Tomaševski (2001), la educación es la llave que abre paso a otros derechos humanos, así, esta investigación de dos años ha sido una aventura muy significativa, que tuvo su inicio en un sueño por analizar el desarrollo como un derecho constitucional, que pudiera crear un impacto jurídico en la búsqueda de la transformación de la realidad de las comunidades marginadas en México, para que a través de un acceso efectivo a su derecho a la educación, cambiar la realidad en la que viven.

Dos años después, con los mismos ideales pero con los pies aterrizados, me di cuenta que el comienzo de un buen trabajo de investigación, abre la puerta, como un primer paso, hacia la construcción de nuevos proyectos, y en la recta final de este documento, que fue a base de esfuerzos y un gran aprendizaje con el acompañamiento de mi tutora la Mtra. Ana Sofía Torres Menchaca, de quien me siento profundamente agradecido, por su persistencia, tenacidad e inteligencia, se puede observar un análisis concreto de como se ha transformado el derecho a la educación en México.

Agradezco al ITESO por la oportunidad de estudiar la Maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, al Coordinador Jesús Ibarra y Delia Silva por estar siempre al pendiente de un desarrollo profesional oportuno, y a mis maestros y compañeros, que fueron una parte muy importante para mi crecimiento, así como mi lector el Dr. Juan Carlos de Obeso.

Finalmente agradezco a mis padres Herman y Silvia, al Mtro. Héctor Andrés Jiménez, y a Maryem Ibarra Zetter, ya que, sin el apoyo de ellos, no hubiera sido posible el estudiar este posgrado.

INDICE

RESUMEN Y AGRADECIMIENTOS.....	1
INTRODUCCIÓN.....	3
Planteamiento del Problema.....	6
Pregunta de Investigación e Hipótesis.....	10
CAPITULO I “FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”	14
Subcapítulo 1.1 Perspectiva académica del derecho a la educación.....	15
Subcapítulo 1.2 Antecedentes constitucionales sobre el derecho a la educación.....	19
Subcapítulo 1.3 El alcance Constitucional del Derecho a la Educación.....	26
Subcapítulo 1.4 Derecho a la educación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.....	31
CAPITULO II “DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, A TRÁVES DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRIBUNALES”	46
Subcapítulo 2.1 Casos de cortes nacionales sobre el derecho a la educación.....	51
Subcapítulo 2.2 El derecho a la educación en México desde los Tribunales mexicanos.....	54
CAPITULO TERCERO “FACULTADES DE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN”	60
Subcapítulo 3.1 Antecedentes de la Ley General de la Educación.....	61
Subcapítulo 3.2 Marco Jurídico de la Ley General de la Educación.....	63
CAPITULO CUARTO “ANÁLISIS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.....	69
4.1 Revolución y el artículo tercero en la Constitución de 1917	69
4.2 Reforma Constitucional del 2011.....	73
4.3 Reflexión de la evolución del Concepto del Derecho a la Educación.....	77
4.4 Revisión de la Ley General de la Educación a la luz de las Obligaciones del Estado.....	79
Conclusiones.....	83
Bibliografía.....	90

“La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”.

Art. 3ro. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Introducción

El interés por investigar sobre el génesis, evolución y concepción del derecho a la educación nace de una doble intensión, primero, de recopilar el avance jurídico en la evolución de este derecho, a partir de las contribuciones y transformaciones jurídicas del artículo tercero Constitucional de 1917 y sus diez reformas y/modificaciones Constitucionales a la fecha, y segundo, la aportación jurídica que hace el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la materia, la cual cobra relevancia a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.

La reforma del artículo primero Constitucional reconoce una interpretación más amplia, que permite observar una nueva concepción del derecho, que propicia nuevas alternativas de garantizar el derecho a la educación, a partir de una nueva visión desde teorías del derecho más compatibles con este paradigma, como lo es la Teoría Neoconstitucional (en adelante TN), sustentada en las leyes nacionales, convenciones internacionales, aportaciones académicas y las sentencias de los tribunales en la materia.

Es así que el presente trabajo es abordado, desde el enfoque de la TN, debido a que es importante observar como el derecho ha evolucionado, a partir de su transformación del derecho positivista hasta la Teoría del Derecho del Constitucionalismo Contemporáneo, también llamado Neoconstitucionalismo. Lo que significa, que bajo una perspectiva Neoconstitucional, se podrá observar el derecho a la educación, con un enfoque más amplio y garantista, que desde las limitantes que mostraba el positivismo jurídico.

Lo anteriormente mencionado, cobra relevancia debido a que como lo comenta Atienza, con la existencia de constituciones rígidas el positivismo jurídico no daba respuesta y solución ante los nuevos fenómenos jurídicos, provocando un estancamiento en el derecho en problemática jurídica acontecida (Atienza, 2014). Así, algunos autores comenzaron a considerar que el positivismo jurídico no permitía una concepción adecuada del derecho y de la interpretación de la realidad.

“Contra el positivismo jurídico del siglo XX se han presentado dos argumentos: el de la injusticia (una norma muy injusta no es derecho) y el de los principios (si existen, entonces, existe también una relación conceptual necesaria entre derecho y moral).” (Carbonell & García Jaramillo, El Canon Neoconstitucional, 2010, pág. 18)

De tal forma que los principios que consagra la **TN** vinculados con el derecho a la educación, han sido abordados por Carbonell & García Jaramillo (2010) en el neoconstitucionalismo que ha determinado la forma de pensar de los procesos institucionales, pedagógicos y jurisprudenciales, en donde ambos autores consideran que uno de sus elementos principales es la renovación de la literatura jurídica.

Carbonell considera que estos derechos con enfoque de la **TN** destacan los derechos sociales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación, y en este sentido se puede tener una perspectiva más acertada sobre este derecho, analizado desde el neoconstitucionalismo, a lo que Christian Courtis desarrolla en relación a los factores jurídicos de las políticas sociales en relación a los derechos sociales:

“Consciente de nuestra realidad latinoamericana, Courtis exhibe los retos de nuestras sociedades para poner en marcha la aspiración de dichos derechos sociales. Pero sabedor de la ineludibilidad de dicha tarea, también ofrece algunos puntos estratégicos de atención para lograr las garantías institucionales de dichos derechos.” (Moreno Cruz, 2010, pág. 341)

Es así que a partir de esta teoría, se observa en el presente documento, como debe de ser interpretado el derecho a la educación, a la luz de la Constitución, leyes, tratados internacionales, jurisprudencia y aportaciones de organismos que trabajan sobre el tema, de tal forma que se pueda construir a través de la investigación jurídica, los nuevos esquemas desde los cuales debe de entenderse el derecho a la educación.

El presente texto se divide en cuatro capítulos, primero, se aborda una revisión de las distintas posturas académicas sobre el derecho a la educación. Segundo, los fundamentos del derecho a la educación a través de la historia de la constitución, mediante el análisis de cada una de las diez reformas que se realizan al artículo tercero de la Constitución desde 1917, hasta la última reforma en el 2016. Asimismo, se aborda un análisis desde la teoría del derecho, tomando el neoconstitucionalismo o postpositivismo jurídico, por ser la perspectiva que se encuentra más compatible a la materia. Finalmente, se aborda el alcance del derecho a la educación del artículo

tercero Constitucional, y quinto, una revisión de los tratados internacionales de los que México es parte en materia de educación.

En el capítulo segundo se revisan algunas de las sentencias del derecho a la educación a través de la jurisprudencia que se han emitido por tribunales constitucionales de otros países, así como tribunales internacionales que han marcado avances en el derecho a la educación, para finalmente revisar algunos casos que se han tratado en tribunales mexicanos al respecto.

En el capítulo tercero se revisa la Ley General de la Educación (en adelante LGE) en México, desde el análisis de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM), así como su funcionalidad frente a los compromisos adquiridos por México en la comunidad internacional, para determinar si la composición jurídica de la LGE permiten dar cumplimiento al concepto de derecho a la educación (el cual se desarrolla en el capítulo primero).

El cuarto capítulo se presenta un análisis de la Revolución Mexicana de 1917 y el artículo tercero desde la CPEUM de 1917 hasta su última reforma en 2016, y la aportación de la reforma al artículo primero constitucional en el 2011, con el propósito de hacer una reflexión de la evolución del derecho a la educación, a partir del nuevo concepto adquirido a partir de las diferentes aportaciones realizadas por académicos, organizaciones internacionales, y desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo, y algunas propuestas que son viables para tener una perspectiva más amplia sobre el concepto del derecho a la educación.

Comprender el alcance del derecho a la educación a partir de los cambios constitucionales y la incorporación de la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es fundamental para promover su protección y garantía, en la búsqueda de los elementos que componen este derecho y que son indispensables para su desarrollo, para enfrentar los nuevos retos y paradigmas, y con ello, lograr que la educación se convierta en un agente de cambio en la realidad del país.

Planteamiento del Problema

Antes de la reforma al artículo 1ro Constitucional en el 2011, el derecho a la educación en México pasó por un proceso de transformación, junto con otros derechos sociales, los cuales a lo largo de la historia no habían sido reconocidos como derechos individuales y vinculantes para el Estado; sin embargo, con el paso del tiempo, la pugna del cumplimiento de estos derechos ha cobrado mayor relevancia, y esto ha permitido un amplio foro de discusiones, sobre la composición de este tipo de derechos, como derechos humanos, la obligación del Estado de garantizarlos, y la importancia sobre su desarrollo progresivo.

El concepto jurídico del derecho a la educación, se ha transformado continuamente, a través de las diez reformas y/o modificaciones al artículo tercero de la CPEUM, y como lo comenta Aragón Reyes (Moreno Cruz, 2010), no se limita a encontrarse dentro del texto Constitucional, sino que éste debe de aplicarse partiendo de la responsabilidad de delimitar las acciones jurídicas necesarias para lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado.

En este sentido, el planteamiento del problema en términos del presente documento, se considera la ausencia de un concepto en México, que integre los distintos postulados que existen en la materia; de tal forma que se busca entender la concepción del derecho a la educación, entendiendo que ha sufrido modificaciones jurídicas de manera continua, y la incorporación de los diferentes ordenamientos jurídicos tanto locales como internacionales que contemplan este derecho; y desde la perspectiva de la **TN**, además se debe de observar las interpretaciones de los tribunales, la creación de jurisprudencia, y la concepción de la educación como un derecho social, lo que permite una nueva conceptualización que potencializa su protección y garantía.

Es así que la **problemática parte de identificar el génesis del derecho a la educación, las reformas constitucionales que ha sufrido, los instrumentos jurídicos donde se desarrolla y la incorporación de tratados internacionales en la materia, para poder crear un concepto integral de este derecho.**

Es importante mencionar, que el ámbito de dimensión del derecho a la educación es muy amplio, dentro de los cuales se encuentran temas como la garantía del derecho, las obligaciones del estado, el presupuesto, la calidad, el acceso, las sentencias de tribunales, etc., al respecto, estos contenidos se presentan de manera ilustrativa y complementaria, para observar lo complejo del entendimiento

del derecho, en la necesidad de trabajar en un concepto integral, sin olvidar que el objetivo es analizar los diferentes instrumentos legales en el análisis su concepción, pero que permite observar como parte de la problemática, es que existen diferentes conceptos, un escaso desarrollo jurisprudencial.

Además de los temas mencionados en el párrafo anterior, se suman al derecho a la educación lo que para Tomasevski (2014), Relatora del Derecho a la Educación, considera como obligaciones de derechos humanos, y que conciernen a todos los sectores de gobierno y deben de responder a la normatividad, para lo que señala que *“los indicadores deberán captar el grado de compromiso y capacidad de los gobiernos para traducir lo normativo en realidad.”*(pág. 343). Así mismo, la autora comenta que los contenidos jurídicos del derecho a la educación debe reflejarse en las obligaciones del Estado, las cuales consisten en que la educación sea asequible, accesible, aceptable y adaptable (Pág. 344). Elementos que nos sirven como parte del desarrollo del concepto del derecho a la educación.

Katarina Tomasevski (2014), propone rasgos o características de derecho a la educación que recuperan obligaciones del Estado a partir de los cuatro elementos de la educación mencionados en el párrafo anterior:

ASEQUIBILIDAD	<p>Obligación de asegurar que la educación gratuita y obligatoria esté asequible para todos los chicos y chicas en edad escolar</p> <p>Obligación de garantizar la elección de los padres en la educación de sus hijos e hijas, y la libertad para establecer y dirigir instituciones de enseñanza</p>
ACCESIBILIDAD	<p>Obligación de eliminar todas la exclusiones basadas en los criterios discriminatorios actualmente prohibidos (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, origen étnico, origen social, posición económica, discapacidad, o nacimiento)</p> <p>Obligación de la identificación de los obstáculos que impiden el disfrute del derecho a la educación</p>
ACEPTABILIDAD	<p>Obligación de proporcionar una educación con determinadas calidades consecuentes con los derechos humanos</p> <p>Obligación de asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje estén conforme con derechos humanos</p>
ADAPTABILIDAD	<p>Obligación de suministrar de una educación extraescolar a los niños y niñas que lo puedes presenciar en la escuela</p> <p>Obligación de ajustar la educación al interés superior de cada niño y niña</p> <p>Obligación de mejorar todos los derechos humanos a través de la educación, aplicando el principio de indivisibilidad de los derechos humanos</p>

Tabla 1.1 Indicadores del Derecho a la Educación (Tomasevski, 2014, pág. 352)

En relación a lo anterior, uno de los problemas que busca resolver el presente trabajo, es observar la evolución y transformación del derecho a la educación, para entender que al día de hoy este derecho ha adquirido una gran gama de obligaciones para el Estado, y derechos para las personas, a partir de la incorporación de nuevas perspectivas del derecho, tal como las presentadas por Katarina Tomasevski y otros académicos, así como las leyes, reglamentos y convenciones en la materia, y el desarrollo de tribunales locales e internacionales.

En México, existe una grave crisis en la aplicación, protección y salvaguarda de los derechos sociales, que ha provocado una problemática continua en la garantía de estos derechos, debido a que la concepción del derecho, debe de contener todos los elementos jurídicos que permitan dar cumplimiento a sus obligaciones.

En este sentido, Edmundo Escobar (1982), analiza el derecho a la educación con una perspectiva más amplia, y enfocada en su evolución; el autor comenta que “*Derecho y Educación ya se han encontrado y conectado profundamente en la vida social de todos los tiempos*”, en donde apuesta además que por su complejidad, y debido a la lógica y metodología debe constituirse un nuevo enfoque teórico y técnico, es decir una nueva disciplina jurídica.

El objetivo del estudio formal del derecho a la educación o el derecho educativo, como denomina el autor, tiene su fundamento en palabras de Escobar (1982) de *reunir, clasificar, jerarquizar, estructurar, fundamentar, etc., la legislación educativa, sus principios y supuestos para la adecuada operatividad dogmática y orgánica*, además afirma su importancia comentando que:

“... por otra parte es dable hablar de una nueva rama especializada de Derecho: El Derecho Educativo, así como se habla del Derecho Administrativo, del Derecho Mercantil, del Derecho Agrario, del Derecho Aéreo, Etc., pues ya no se puede dejar de tomar en cuenta que el derecho educativo, es toda la legislación sobre el Sector Educativo de los pueblos, está destinado a regir la conducta humana. (Escobar, 1982, pág. 212)

Así las consideraciones de Escobar, si bien no son novedosas, debido a que fueron propuestas desde 1982, permite observar que desde hace algunos años ya se consideraba la importancia de este derecho, la cual debe de entenderse desde su complejidad y dimensión, y por otro lado debido al gran bagaje a partir de la jurisprudencia, legislación y reglamentación, que ya existe en los

Estados Modernos, dan paso a una concepción más amplia del derecho a la educación que además es necesaria para atender los problemas jurídicos.

Si bien es cierto, que el objetivo de este trabajo no tiene como objetivo analizar de fondo la justiciabilidad del derecho a educación, se puede observar que esta información resulta relevante para la construcción del más amplio concepto del derecho a la educación, toda vez que el fenómeno de su justiciabilidad permite entender de qué forma se ha interpretado este derecho a partir de una concepción más novedosa y garantista.

Al mismo tiempo, conocer el concepto de derecho a la educación, puede permitir formas de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a este derecho, y analizar de qué manera se hace accesible este derecho a partir de su definición, que tiene su punto de partida en los principios constitucionales y los parámetros internacionales a través de los órganos jurisdiccionales de administración de justicia, quienes deben de desarrollar el alcance del derecho a la educación.

El derecho a la educación, además de ser un derecho que debe ser garantizado por el Estado, tiene que cumplir con las siguientes características de acuerdo con el parámetro constitucional (Const., 1917, art. 3ro.), primero, la educación que imparta el estado tendra a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano; segundo, la Constitución dice que la educación tiene que ser un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; tercero, la Constitución refiere que será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; cuarto, la Constitución establece “...emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”

Es así que frente a la realidad que se vive en México, y las obligaciones que emanan del ordenamiento constitucional, primero se debe iniciar por conocer cuál es el concepto actual sobre el derecho a la educación, y entender las obligaciones que tiene el Estado frente a este nuevo concepto, y para que los tribunales apliquen métodos jurídicos de acuerdo al alcance y contenido jurídico del derecho a la educación.

Es importante considerar, a partir de las aportaciones de Edmundo Escobar, si la Ley General de la Educación, garantiza el derecho a la educación de acuerdo con los parámetros Constitucionales, y las obligaciones del Estado frente a la comunidad internacional, lo que conlleva a una reflexión

sobre las atribuciones y facultades de dicha ley y si estas son compatibles con los estándares constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Carbonell (2011) acertadamente comenta que *“la legitimación de los poderes públicos no depende ya solamente de que no entorpezcan o limiten el disfrute de los derechos, sino también que los promuevan eficazmente”*, es así que la problemática del derecho a la educación, como se puede observar, es compleja, y el primer paso para el camino hacia la garantía de los derechos sociales, debe iniciar a través de trazar un camino hacia la construcción de un concepto de derecho a la educación, que permita integrar todos los elementos que tengan la interpretación más amplia a favor de las personas.

Pregunta de Investigación e Hipótesis

La **pregunta de investigación**: ¿Cómo se ha desarrollado el derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano y cuál es su alcance? teniendo como **Hipótesis** que: el desarrollo del derecho a la educación ha sufrido una transformación significativa que ha dado paso a interpretaciones más amplias a través de las aportaciones de las reformas constitucionales al artículo tercero y a partir de la incorporación de tratados internacionales por la reforma del artículo primero constitucional en el 2011, pero por otra parte es limitado el concepto en la Ley General de la Educación.

Objetivo General: Conocer el génesis, evolución jurídica y alcance del derecho a la educación desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 hasta la última reforma al artículo tercero en 2016, así como la importancia de la Reforma del artículo primero Constitucional en el 2011.

Objetivos Específicos:

1. Hacer una revisión de las reformas y elementos del artículo tercero constitucional como conceptos rectores del derecho a la educación.
2. Hacer una recopilación de los instrumentos internacionales que versan sobre el derecho a la educación y que son vinculantes para el Estado Mexicano.

3. Revisar las propuestas y estudios realizadas por académicos mexicanos sobre el derecho a la educación.
4. Realizar un estudio sobre cómo se ha garantizado el derecho a la educación en los tribunales en México a partir de un constitucionalismo contemporáneo local e internacional.
5. Hacer una revisión del contenido y las facultades de la Ley General de Educación en contraste con el artículo tercero constitucional y los tratados internacionales en la materia.

Conceptos Rectores:

Alcance del concepto del derecho a la educación

Reforma al artículo primero Constitucional

Reformas al artículo tercero Constitucional

El derecho a la educación como una premisa de acceso a otros derechos

La relevancia del La Ley General de Educación

Preguntas Adyacentes:

¿Cómo se ha desarrollado el derecho a la educación desde la perspectiva de los académicos mexicanos?

¿Bajo una perspectiva del derecho a la educación actualizada en las últimas reformas constitucionales, la LGE resulta potenciadora o limitativa?

Durante el presente trabajo se buscará en cada uno de sus capítulos dar respuesta a la pregunta de investigación, desarrollando los elementos jurídicos que componen el derecho a la educación en el sistema mexicano; estos elementos se retoman desde el artículo tercero de la CPEUM y sus diez reformas, la reforma en el 2011 al artículo primero del mismo ordenamiento, los tratados internacionales, y además las aportaciones de los académicos en la configuración de un derecho garantista, así como las sentencias de los tribunales locales e internacionales y la doctrina.

Es indispensable el análisis de la LGE para entender si esta nueva concepción del derecho a la educación se ha desarrollado de manera oportuna, y si el Estado cumple con sus obligaciones a partir de este ordenamiento jurídico.

Dentro del presente trabajo se utiliza un marco metodológico que permite sistematizar la información sobre el derecho a la educación, identificando los procesos históricos en su evolución, los conceptos jurídicos que consagra el artículo tercero Constitucional, las aportaciones de los académicos, la reflexión del artículo primero constitucional, como fuente primaria de extensión del derecho, hacia la incorporación de los tratados internacionales en la materia, así como los elementos jurídicos identificados en sentencias (de tribunales locales e internacionales, así como en otros países) sobre la concepción y alcance del derecho a la educación.

Raúl Rojas Soriano (1989), comenta que la información se divide en primaria y secundaria. La información primaria se adquiere a través de cuestionarios, entrevistas, observación, etc. La información secundaria se extrae de fuentes documentales, es así que el presente trabajo se desarrolla con este segundo supuesto. Debido a que el análisis jurídico del derecho a la educación se configura a través de las diferentes leyes nacionales e internacionales, así como las aportaciones de académicos y tribunales nacionales e internacionales.

En el presente trabajo se revisa la evolución del artículo tercero de la CPEUM en 1917 hasta su última reforma en 2016, los tratados internacionales de los que México es parte en materia de educación y la LGE, para entender el alcance jurídico del derecho a la educación en el análisis de estos instrumentos que han ampliado la concepción de este derecho, que sirve como marco de referencia en una nueva configuración que permite una garantía más amplia.

Ponce de León Armenta (1996) comenta que *“la metodología del derecho es la parte lógica que tiene por objeto el estudio de los métodos específicos de la ciencia jurídica y los generales aplicables al derecho en el contexto de la teleología y la axiología jurídica.”* Y para estudiar la metodología del derecho es necesario saber sobre métodos generales.

León Armenta habla sobre diferentes metodologías, para desarrollo del presente trabajo se toma como marco de referencia el **método sistemático** el cuál ordena los conocimientos concentrándolos en sistemas coherentes, estudia las formas en que se ordenan en un todo, una serie de conocimientos, de manera que resulten claras las relaciones y dependencias reciprocas de las

partes componentes del todo, como el caso de las relaciones de las leyes locales con las internacionales y el sustento de su interdependencia. (Ponce de León Armenta, 1996).

De esta manera podremos dar cumplimiento al objetivo general y específicos los cuales se analizarán en las conclusiones para que se pueda observar el cumplimiento de los mismos, sin embargo a lo largo del trabajo se irán retomando para un mejor entendimiento.

CAPITULO PRIMERO

FUNDAMENTOS DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada en el inicio del presente trabajo: ¿Cómo se ha desarrollado el derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano y cuál es su alcance? es necesario conocer el génesis del derecho a la educación en la CPEUM de 1917 en su artículo tercero, así como observar la evolución jurídica que ocurre a partir de las reformas constitucionales en la materia, y poder identificar las trasformaciones jurídicas que ha tenido el concepto.

Al mismo tiempo, mediante el reconocimiento de los derechos a los que el Estado Mexicano se ha comprometido bajo el principio de *Pacta Sunt Servanda*¹, y que la reforma al artículo primero de la CPEUM en el 2011, los tratados internacionales en materia de educación forman parte del *Corpus Iuris* que debe ser analizado como parte del *Bloque Constitucional*, que permite una interpretación más amplia del derecho.

El Bloque Constitucional se ha desarrollado como un conjunto de normas que tienen jerarquía constitucional, “las normas constitucionales no son sólo aquellas que aparecen expresamente en la Carta sino también aquellos principios y valores que no figuran directamente en el texto constitucional pero a los cuales la propia Constitución remite”. (Rodríguez Manzo, Arjona Estévez, & Fajardo Morales, 2013)

De tal forma que en el presente capitulo tiene por objetivo conocer los fundamentos constitucionales de la educación, así como la evolución que ha tenido en relación con las reformas y al mismo tiempo hacer un análisis de los tratados internacionales de los que México es parte sobre el derecho a la educación y observar si estos derechos adquiridos se han armonizado en la legislación interna y cuales son aquellos derechos que todavía existe un amplio camino por recorrer.

¹ Convención de Viena de Derecho de los Tratados (1969). Artículo 26 y 27. U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 33. http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf

En el presente capítulo es importante identificar el trabajo que se ha realizado por los académicos sobre el derecho a la educación, permitiendo tener además otras visiones sobre el alcance que debe tener este derecho a partir de su contenido jurídico constitucional y convencional.

Lo anterior aporta un primer acercamiento para entender la configuración jurídica del derecho a la educación, cuales son las reformas que han permitido su transformación y adecuación de contenido, cuales son los derechos y deberes que consagra, y de qué hasta qué punto los tratados internacionales se han incorporado al derecho interno.

1.1 PERSPECTIVA ACADÉMICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Iniciar revisando los textos académicos sobre el derecho a la educación nos permiten tener una perspectiva amplia y novedosa, y las aportaciones que se presentan son de diferentes momentos históricos en la educación en México, donde se puede identificar que se ha desarrollado una concepción más amplia, apegada al cumplimiento de las obligaciones del Estado con perspectiva en los derechos humanos y por otro la integración de los tratados internacionales en la re significación de este derecho.

María Mercedes Ruíz Muñoz en su obra *“Derechos a la Educación: Política y Defensa de la escuela Pública”*, uno de los escritos más recientes en materia de derecho a la educación, se cuestiona si ¿El derecho a la educación es aquel derecho básico que se corresponde con los deberes básicos de un Estado? a lo que responde que *“Históricamente, el derecho a la educación se reconoce como un campo de permanente disputa entre la sociedad, los padres de familia, el Estado, la Iglesia y los particulares”*, y concluye que *“la Educación es un derecho social de los individuos y que a su vez una obligación gubernamental, relación a la que se denomina, garantía social, y que se expresa en el texto constitucional”*. (Ruíz Muñoz, 2015)

Ruíz Muñoz en el planteamiento de su pregunta en el párrafo anterior, extiende su análisis comentando que *“[a]lgunos autores coinciden en señalar que, el derecho a la educación ha estado implícito a lo largo de la historia jurídica del país al señalarse la obligatoriedad del Estado y de los padres de proveer educación, o su gratuidad”*, y concluye que *“es con la reforma*

constitucional de 1993 que se expresa el término derecho a la educación de los individuos”. (Ruíz Muñoz, 2015)

La autora Ruiz Muñoz, señala desde el aspecto jurídico que el derecho a la educación tiene un doble dimensión, por un lado, un derecho para el individuo y por otro una obligación para el Estado, y además se puede observar que el papel de la participación de los padres es fundamental. Es evidente que la responsabilidad del Estado se desprende del texto constitucional que establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, del artículo tercero constitucional y los tratados internacionales en materia de derecho a la educación.

Para el autor “Bolaños Guerra”, en su obra *“El derecho a la educación”* se cuestiona “el problema del sujeto de derecho y la disputa por la educación a lo largo de la historia en las sociedades modernas” a lo que responde que *“el derecho a la educación surge de la confluencia de múltiples sentidos, entre los que se encuentran: un privilegio de las élites de desarrollar plenamente su personalidad, una atribución de los Estados-nación para moldear a sus gobernados y una necesidad de los sectores de la producción para aleccionar obreros”*.

Bolaños Guerra concluye que *“este derecho supone al menos seis aspectos para su cumplimiento y ejercicio: acceder a, y concluir, la educación obligatoria, recibir una educación de calidad, la posibilidad real de aprendizaje del estudiante, la garantía efectiva del derecho a la información, la igual de oportunidades para acceder a los niveles posteriores a los básicos, y la participación del Estado en la progresiva cobertura y planeación del nivel superior”*. (Bolaños Guerra, 1996)

Si bien es cierto el concepto del derecho a la educación ha evolucionado y se ha transformado, debido a que los tres supuestos presentados en un inicio por el autor Bolaños Guerra, no son precisamente enfocados al cumplimiento del derecho como garantía de los ciudadanos, sino como una consecuencia ante la necesidad de los grupos de poder; sin embargo a pesar de este enfoque de manera posterior los seis aspectos que menciona son una aportación significativa para el ejercicio de este derecho.

La implementación jurídica para el cumplimiento de estos aspectos mencionados por Bolaños ha sido una tarea difícil para el desarrollo de bases jurídicas que permitan su cumplimiento en la dimensión individual, así como lo comenta la autora Ruíz Muñoz, y se puede entender que la aportación propuesta por Bolaños marca parámetros que se pueden atender en el establecimiento

de medios jurídicos necesarios para el cumplimiento constitucional del derecho a la educación y que se deben de encontrar en las leyes que regulan la materia.

De manera previa en la búsqueda de alternativas para el cumplimiento de este derecho, algunos autores tenían propuestas sobre el derecho a la educación desde una perspectiva futurista, a lo que “Jaime Castrejón” en su obra “El derecho social a la educación. Una visión del futuro” se cuestiona “¿Cuáles son los ejes de análisis de la educación como derecho social?” a lo que responde que son *“las relaciones entre la educación y la sociedad, las contribuciones del sistema educativo al desarrollo social del país y, por último, el papel del Estado en la organización y regulación de la educación nacional orientada al logro de los propósitos sociales”*.

El autor Castrejón concluye que *“Tras concebir que la educación es una necesidad individual y colectiva, considera que para lograr el derecho a la educación se requiere una nueva estructura social, económica y política tanto como una sociedad que se acerque hacia un sistema democrático”*. (Castrejón Diez, 1978). En este sentido para alcanzar la nueva estructura social, económica y política, debieron de realizarse cambios importantes en la legislación, así que posterior a la reflexión de Castrejón en 1978, es en 1993 incorporado la visión individual del derecho a la educación, como ya lo comentaba Ruíz Muñoz.

Así que actualmente se puede considerar que la evolución del derecho a la educación se necesita una nueva estructura y replanteamiento a partir de las aportaciones de los cambios jurídicos que continúen adecuando nuevas concepciones del derecho, desde la educación básica hasta la educación superior.

Jorge Madrazo y Walter Beller en su obra “Consideraciones sobre el derecho a la educación y la educación superior en México desde la perspectiva de los derechos humanos”, se cuestiona ¿Cómo se garantiza por el Estado Mexicano el derecho a la educación? a lo que responde que *“Desde el enfoque de los derechos humanos, argumentan que el derecho a la educación es una garantía que se tiene desde el nivel básico hasta el nivel superior según el orden jurídico nacional e internacional.”* Los autores concluyen que:

“El nivel básico, el derecho a la educación es un derecho subjetivo de modo cierto, determinado y oponible inmediatamente al Estado. En cuanto a la educación de nivel superior afirmaron que el Estado tiene la facultad de promoverla y atenderla en medida de sus posibilidades, aunque su no exigibilidad inmediata no exima al Estado de realizar esfuerzos presupuestales para satisfacer progresivamente la

totalidad de la demanda educativa en este nivel, por lo que afirman que no debe confundirse el derecho a la educación con el derecho de acceso a las instituciones de educación superior”. (Madrado Cuellar & Beller , 1995)

Se pueden observar diferentes aportaciones realizadas por algunos de los autores que han trabajado sobre el derecho a la educación, y que a manera de concentración de las ideas presentadas, se puede identificar que se considera como un derecho social, en donde existe una obligación gubernamental para su cumplimiento, siendo un derecho con una necesidad individual y colectiva siendo en 1993 que se reconoce con una dimensión como derecho individual.

Otras aportaciones importantes que se identifican son los aspectos que se proponen para el cumplimiento y ejercicio del derecho a la educación, y la identificación de una nueva estructura social, económica y política. Las aportaciones realizadas por los autores permiten hacer una comparación de la evolución del derecho a la educación en las leyes que la regulan, los cuales se analizan en los capítulos subsecuentes.

Es así que el derecho a la educación es un tema amplio desde el nivel básico hasta el nivel superior, creando una obligación al Estado desde el texto constitucional, y se observa que las reflexiones de los autores sobre este derecho tienen un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos, que si bien resulta compleja su determinación desde aspecto jurídico, para el cumplimiento de cada uno elementos analizados en sus carácter individual, se debe avanzar hacia una configuración positiva del derecho para su cumplimiento.

Así a manera de conclusión, se puede entender que las contribuciones de los autores, sobre el derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano, han permitido incorporar obligaciones al texto constitucional en el artículo tercero de la CPEUM, en la construcción de un derecho a la educación más amplio y con perspectiva de derechos humanos, y al mismo tiempo se observa que las críticas van encaminadas a la adopción de los tratados internacionales y la búsqueda de un marco jurídico que garantice el cumplimiento de este derecho.

1.2 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Después de observar diversas posturas, los antecedentes del derecho a la educación en México nos ayudan a entender las condiciones que se han vivido en México en la transformación y evolución del marco normativo en la materia, así como la reflexión sobre los avances y retos que se enfrentan para su desarrollo e implementación. Por lo que una reflexión sobre el concepto del derecho a la educación desde sus primeras aportaciones permitirá observar de qué forma ha evolucionado y los elementos jurídicos que ha adquirido a través de la historia y que conforman el concepto actualizado del derecho.

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 su artículo tercero establecía una forma muy sencilla y limitada sobre el derecho a la educación señalando que: *“la enseñanza es libre, la Ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir”* (Const., 1857, art. 3ro.); es así que aquí encontramos un punto de referencia que permitirá observar la evolución histórica del derecho a la educación. Posteriormente, durante el gobierno del Presidente Benito Juárez se contempla la educación primaria gratuita y obligatoria (UNAM, 1981), lo que años más tarde no quedaría reflejado en la Constitución de 1917, sino hasta años posteriores con las reformas.

La Revolución tenía como precedente el derecho a la educación exclusivamente para las elites, en donde no existía un acceso y oportunidades generalizadas, es así que los elementos que encontramos en la Constitución de 1917 se identifican la enseñanza libre, laica y gratuita a nivel primaria y en su artículo tercero constitucional establecía:

“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, al ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” (Const., 1917, artículo 3ro.)

Posteriormente a la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la primera reforma al artículo tercero se realiza en 1934, la cual fue presentada por el entonces Partido Nacional Revolucionario, en la cual se agrega una educación “socialista”, así como las obligaciones y facultades del Estado sobre el derecho a la educación, cuya reforma establece:

“La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el anatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear una juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.

Sólo el Estado-Federación, Estados, Municipios - impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrá concederse autorizaciones a los particulares... de acuerdo en todo caso con las siguientes normas:

I.-... las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones exclusivas o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente...

... La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente... El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias... a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y al señalar las acciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos infrinjan.” (Const., 1917, reforma al art. 3ro. en 1934)

En la reflexión de la reforma de 1934 bajo el mandato del Presidente Lázaro Cárdenas, se puede observar por un lado que la reforma educativa era un tema prioritario para su mandato, debido que se realiza en su primer año de gestión, y segundo que el contenido jurídico del artículo tercero Constitucional está más enfocado a su parte administrativa y organizacional en relación a las obligaciones y atribuciones del Estado en la materia, de tal forma que las garantías y derechos de los ciudadanos no se desarrollan en este momento de la historia. Sin embargo también se observa la importancia de fijar las aportaciones económicas para la educación y finalmente señala que deben de emitir acciones para los funcionarios que no cumplan con las disposiciones en materia educativa.

La segunda reforma se realiza en 1946, se pueden identificar elementos encaminados a un reconocimiento de los derechos que busca garantizar la educación para los ciudadanos, y suprime el concepto de “educación socialista” encontrando además una diferencia sustancial en la

redacción jurídica de la última reforma en 1934, en comparación con la reforma de 1946 que establece:

“La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios-tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias... basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a).- Será democrático... como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b).- Será nacional en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá... aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c).- Contribuirá a la mejor convivencia humana...

VI.- La educación primaria será obligatoria;

VII.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

VIII.- El Congreso de la Unión... expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la fundación social educativa... a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” (Const., 1917, reforma al art. 3ro en 1946)

Así encontramos por primera vez en el texto constitucional se visualiza el interés por legislador de reconocer que el derecho a la educación está encaminado a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, término que resulta interesante para reflexionar, debido a que el compromiso que adquiere el Estado no sería a través de los años una tarea sencilla, ya que conllevaba identificar todos los elementos, tanto jurídicos, administrativos y de políticas públicas, que se requieren para alcanzar su cumplimiento.

Por otro lado se observan elementos importantes como el señalamiento de que la educación primaria será obligatoria y toda la educación impartida por el Estados será gratuita, si bien en la reforma de 1934 ya se había establecido la obligatoriedad de la educación primaria, en esta ocasión se extiende la gratuidad en 1946 a todos los niveles educativos como responsabilidad del Estado en proveerlos.

La tercera reforma tiene lugar hasta 1980, 34 años posteriores a la última reforma, la cual busca dar independencia a la educación superior de tal forma que se realiza una adicción, por lo que la fracción VIII es sustituida por una nueva fracción, y esta misma se convierte en la fracción IX, quedando estipulado de la siguiente forma:

“VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

IX.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.” (Const., 1917, reforma al art. 3ro. 1980)

Como se observa las reformas en materia de derecho a la educación, avanzaron de forma lenta, ya que los cambios realizados desde 1946 a 1980 no fueron cambios sustanciales, doce años después, en 1992, en la cuarta reforma (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 1992), se deroga la fracción IV que versa sobre las actividades educativas de las corporaciones religiosas, la fracción I se divide para pasar a ser fracciones I y II, quedando de la misma forma su contenido jurídico, por lo que se recorren las fracciones II y III para ser III y IV respectivamente, y esta última fracción mencionada es mínimamente reformada en cuestiones de redacción.

En 1993, se aprueba la quinta reforma al artículo tercero Constitucional, en la que se establece que el Estado atenderá todos los tipos y modalidades educativas en todos los niveles desde básico hasta superior, y además considera que la educación primaria y secundaria serán obligatorias. Estableciendo en su primer párrafo *“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.”* Y en su párrafo quinto estipula que:

“V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;” (Const.1917, reforma al art. 3ro en 1993)

En el 2002, se aprueba la sexta reforma, mediante la cual se adiciona al el artículo tercero Constitucional el derecho que tiene *“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”* también establece que la primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Además el artículo 31 constitucional establece:

“Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.” (Const. 1917, reforma al art. 3ro en 2002)

En el 2011, se aprueba la séptima reforma, se realiza una mínima adecuación al primer párrafo del artículo tercero Constitucional, suprimiendo las palabras *“Estado-Federación, Estados, Municipios”* y sustituyendo de la siguiente manera: *“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en el, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”* (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2011)

En el 2012, octava reforma, nuevamente se realiza una adecuación al artículo tercero Constitucional, en donde establece que la educación básica y media superior son obligatorias, el cual queda configurado de la siguiente manera: *“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”* (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2012). Por otro lado el párrafo primero inciso C, sin cambiar su contenido jurídico, agrega el término *“aprecio y respeto por la diversidad cultural”*.

En la fracción V solamente hace una adecuación en relación a que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos desde la educación inicial hasta la superior, y en el artículo 31 se reforma la fracción I de la siguiente manera *“Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.”*

En el 2013, novena reforma, el artículo tercero Constitucional sufre modificaciones y adiciones sustanciales en donde se reforman las fracciones III, VII y VIII, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso D al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX. En cuanto a la adición del párrafo tercero se establece:

“El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2013)

Es aquí donde formula por primera vez que el Estado garantizará la calidad en la educación, en donde además se compromete a que esta calidad está relacionada a los recursos materiales y de organización, así como la infraestructura y personal docente y directivo, por lo que en este momento histórico se puede observar el gran avance en materia constitucional, el cuál debe de ser compatible con los instrumentos jurídicos que garanticen el cumplimiento constitucional.

En el inciso D se estipula que *“Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”*. Se realizan tres reformas en los párrafos III, VII y VIII, y por primera vez, en la fracción III se estipulan los exámenes de oposición:

“III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República... Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan...” (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2013)

Así el párrafo VII desarrolla la libertad de cátedra e investigación de la educación superior, sobre el ingreso y promoción del personal académico, y en el párrafo VIII se establece que deben de fijarse las aportaciones económicas correspondientes a la educación y las sanciones para los funcionarios que incumplan las disposiciones legales.

En la adición del párrafo IX se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, bajo la dirección del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (En adelante INEE), con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual se establece de la siguiente manera:

“IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

- a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;*
- b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y*
- c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social...”* (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2013)

Es importante mencionar que la creación del INEE, ha sido un gran paso para realizar el impacto que tiene el alcance del derecho a la educación a través de las evaluaciones realizadas en el territorio nacional, y si bien no tiene un carácter jurídico de impartición de justicia, su creación está enfocada en evaluar la calidad, desempeño y resultados de sistema educativo en México.

Así mismo se reforma el artículo 73 constitucional para poder estar armonizado con las reformas del artículo tercero en donde su párrafo XXV es adecuado de la siguiente manera:

“XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales... Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;” (Const. 1917, reforma al art. 73 en 2013)

Finalmente la última reforma al artículo tercero de la CPEUM se realiza en el 2016 (Const. 1917, reforma al art. 3ro. en 2016), décima y última reforma realizada, en la cual cambia el término individuo por persona, que se encuentra en resonancia con el artículo primero Constitucional reformado en el 2011 y consagra el principio pro persona, así el párrafo III tiene mínimas adecuaciones, al igual que el párrafo VIII.

Así que desde la creación del derecho a la educación en la constitución, se observa que este derecho carecía de elementos jurídicos que permitieran un desarrollo oportuno de garantía a través de su

concepto inicial; Sin embargo con las diez reformas analizadas, se visualiza una serie de derechos y obligaciones del Estado que parte de su evolución.

En este sentido, después de una análisis de las reformas al artículo tercero Constitucional, en el presente trabajo se busca identificar, más adelante, si la LGE cuenta con las facultades para el desarrollo e implementación de este derecho en relación a las obligaciones jurídicas derivadas del artículo tercero constitucional y de los tratados internacionales que versan sobre el derecho a la educación a partir de la interpretación de la reforma del artículo primero constitucional del 2011. Así, el derecho a la educación debe de ser jurídicamente implementado como un derecho fundamental de la persona, indispensable para el desarrollo progresivo hacia una realización personal, con una vida digna que le permita el acceso a todos sus derechos, el cual parte de la evolución del concepto de este derecho a partir de las reformas.

Para complementar la parte histórica de la constitución jurídica del artículo tercero Constitucional, derivado de las diez reformas realizadas al derecho a la educación, desde su mandato en 1917, y su periodo de reformas desde 1934 hasta 2016, se puede entender de una manera más puntal las propuestas presentadas por los académicos, en los momentos específicos donde el derecho a la educación continuaba en una transformación, y que durante años se mantuvo estático sin avances jurídicos; sin embargo también se observa que de cara a las demandas derivadas de las nuevas reformas y evolución del derecho debido a la reformar del artículo primero de la CPEUM en el 2011, su alcance es más amplio y complejo.

1.3 EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

A partir de una reflexión de las diez reformas al artículo tercero de la CPEUM, y la importancia de la Teoría Neoconstitucional, permite tener una clara idea de los elementos que ha ido incorporando a través de su evolución y que componen el concepto del derecho a la educación; sin embargo es muy importante que a la luz de última reforma realizada en el 2016, se pueda observar la constitución de este derecho a la luz de la reforma del artículo primero de la CPEUM, en la búsqueda por entender los conceptos jurídicos que componen las garantías y derechos humanos.

En el presente escrito se observan los principios que emanan del texto constitucional, ampliando el derecho bajo la premisa del principio pro persona, buscando la máxima expresión jurídica que permita observar los aspectos jurídicos de interpretación. En este segmento se analizan algunos de los postulados de este derecho desde una revisión al texto constitucional, retomando los principios y preceptos que consagra este derecho, para conocer los alcances y facultades que son inherentes a cada individuo.

La CPEUM no restringe el derecho a la educación a su simple existencia, o como una configuración de servicio público, por el contrario, la Carta Magna confiere aspectos multidimensionales que integran la construcción de un derecho que es fundamental en el desarrollo de los ciudadanos y de la sociedad, entendiendo que el derecho a la educación es imprescindible para el desarrollo integral de los seres humanos, y es pieza ineludible para detonar el desarrollo que permita vincular el acceso a otros derechos fundamentales.

El artículo 3ro. Constitucional establece que: *“la educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”*,² es decir que la educación no se limita al acceso a una institución educativa, sino que además debe enfocarse al desarrollo de las facultades del ser humano.

Por otra parte la Constitución dice que la educación tiene que ser *“...un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”*, en este precepto se encuentra consagrado uno de los objetivos principales del derecho a la educación, sobre el cual se funda la base del sistema educativo y que es una obligación que se crea hacia el Estado por la expresión constitucional, que si bien no debe ser percibida como retórica, sino más bien como un precepto debe de ser abordado desde el aspecto jurídico para su cumplimiento.

² También contempladas en el artículo 7 de la Ley General de la Educación.

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;

Posteriormente, la Constitución refiere que la educación *“será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”*, como un pilar para que el individuo y la sociedad puedan tener una formación que le permita aspirar una mejor calidad de vida, que le permita transformar su realidad, y que los conocimientos adquiridos le permitan un acceso a mejores oportunidades y a otros derechos.

Una parte fundamental del derecho a la educación la misma Constitución establece *“...emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”* Una tarea más específica se puede observar como norma general dirigida a la colectividad, enfocada en la búsqueda de igualdad.

Hasta este punto podemos observar que el artículo tercero constitucional consagra cuatro principios, de tal forma que además de versar sobre la garantía de acceso al derecho de la educación, establece los parámetros de cómo debe desarrollarse. Esto se convierte en un punto trascendental que conlleva a un punto de análisis que nos permite de una manera clara, observar si estos principios se desarrollan en el cumplimiento del derecho a la educación a través de mecanismos jurídicos.

En este sentido se presenta a continuación un cuadro que permita observar los cuatro hallazgos en materia constitucional sobre el derecho a la educación, y que permiten visualizar de una manera gráfica, los elementos que componen el derecho a la educación.

Derecho a la Educación. Artículo 3ro. Constitucional	
1	<i>“la educación que imparta el estado tendiera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”</i>
2	<i>“...un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.</i>

3	<i>“será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”,</i>
4	<i>“...emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”</i>

Tabla 1.3 Art. 3ro. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por otro lado uno de los temas del derecho a la educación es tratado por Schettino (2003) en su obra “El derecho a la educación en el constitucionalismo mexicano”, y se cuestiona si “¿la gratuidad de la educación pública y la educación superior en México es coherente con el contenido del artículo 3ro. Constitucional y de los principales instrumentos internacionales? a lo que argumenta que *“la educación es un derecho fundamental de toda persona para hacer viable la vida humana”* y el autor concluye *“que debe ser tutelado por el orden jurídico fundamental mexicano y que es obligación del Estado garantizarlo pese a limitaciones de corte económico.”*

La gratuidad de la educación también es un elemento que debe de permear en el derecho a la educación, para poder dar cumplimiento al precepto constitucional sobre la búsqueda de la igualdad social, debido a que si no se alcanza a garantizar el derecho a la educación se pone en riesgo el hacer viable la vida humana, debido a que se considera este derecho como un multiplicador al acceso de otros derechos.

Para el autor Álvarez Mendiola (1995) en su obra “La escolaridad básica como derecho humano en México”, se cuestiona “¿qué tanto la política educativa, las prácticas educativas y la escuela misma contribuían a concretar el derecho a la educación y a contar con instituciones que enseñaran los contenidos y valores sustentados en la perspectiva de los derechos humanos y en las tendencias internacionales que articulan la educación con la transformación económica y social”, a lo que responde que es deficiente *“cuando en la sociedad se tienen amplias franjas de población que no cuentan con la educación básica terminada y la educación no proporciona los conocimientos y habilidades necesarias para la inserción productiva y la satisfacción de las necesidades básicas”*.

El autor concluye que *“no se puede hablar del cumplimiento cabal del derecho humano fundamental a la educación tal como está consagrado en el artículo 3ro. de la Constitución, de modo que la universalización de la educación básica con calidad es un objetivo que requiere la participación del Estado y la sociedad”* (Álvarez Mendiola, 1995). Sin embargo a pesar que no existe o existiera un cabal cumplimiento, no sería una excusa que pueda eximir de responsabilidad al Estado, por lo que es necesario tomar las medidas jurídicas necesarias para avanzar en el cumplimiento de este derecho.

Así como se observa los principios que marca la Constitución, es de la misma forma que el Estado debe de avanzar hacia la construcción de leyes e interpretaciones judiciales que marquen precedentes en la aplicación del derecho a la educación en la práctica cotidiana de administración de justicia y en las facultades legislativas otorgadas para hacer justiciable este derecho, como se observa por las aportaciones de los académicos, esta construcción parte de la integración de propuestas que permiten tener una reflexión más profunda del alcance de los derechos.

Es importante comentar que para términos prácticos del presente trabajo, se realiza un análisis de los conceptos jurídicos que parten del artículo tercero constitucional, para observar en qué medida se encuentran armonizados con los tratados internacionales en materia, para finalmente comparar si estos derechos y facultades son parte de la LGE.

Haciendo una reflexión sobre la configuración del derecho a la educación en su aspecto jurídico desde la CPEUM y los Tratados Internacionales de los que México es parte a luz de la reforma del artículo primero Constitucional se realiza una revisión a la jurisprudencia y el derecho comparado en busca de los estándares jurídicos que han sido expresados por otros tribunales, y que pueden servir como un parámetro de observación en la evolución de la concepción del derecho a la educación.

A manera de conclusión, el derecho a la educación se puede entender que el Estado ha adquirido una serie de responsabilidades que son una obligaciones positivas, y a la luz de la interpretación de la T.N., que es presentada por Carbonell y García Jaramillo (2010, pág. 341) como una teoría portadora de ideas *vigorosas, interesantes y actuales*, debe por lo tanto el Estado utilizar todos los medios posibles para su cumplimiento. Además el concepto que se construye a partir del artículo

tercero Constitucional ha adquirido una lista de derechos los cuales deben de ser garantizados, y son oponibles jurídicamente al Estado por las personas bajo su jurisdicción.

En relación a la pregunta de investigación, se puede observar que el desarrollo del derecho a la educación, posterior a las diez reformas al artículo tercero de la CPEUM, ha aterrizado un concepto garantista de derechos humanos, y que el avance jurídico que ha alcanzado ha sido muy importante; Sin embargo, como se puede observar para cumplir la obligación adquirida por el Estado a partir de una concepción garante del derecho, se debe observar las facultades otorgadas a las leyes que corresponde el desarrollo de estos derechos.

1.4 DERECHO A LA EDUCACIÓN EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el presente subcapítulo pretende coadyuvar en el desarrollo del derecho a la educación analizado a partir del artículo tercero de la CPEUM, a la luz de la reforma al artículo primero de la CPEUM. Como se ha mencionado de manera reiterada, los tratados internacionales tienen un papel preponderante para la concepción del derecho, así que el derecho a la educación tiene su precedente en un gran número de tratados internacionales en la materia que México ha firmado y ratificado y se presentan a continuación, de tal forma que pueda garantizar el principio *pro persona*, en búsqueda de aplicar la norma más favorable, y de la misma forma el entendimiento de la concepción más amplia en la integración de este derecho.

El marco jurídico internacional de los tratados que México ha firmado y ratificado en el ámbito internacional en relación al derecho a la educación, a pesar de que existía la obligación del Estado de garantizar el desarrollo e implementación de sus compromisos adquiridos bajo el principio de *Pacta Sunt Servanda*, (Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, 1969) es con la reforma del artículo primero Constitucional que toma fuerza para exigir su cumplimiento, ya que establece que: “*En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...*” de tal forma que se retoma la perspectiva internacional de los derechos

humanos, sobre la importancia del derecho a la educación como un elemento fundamental para el cumplimiento de otros derechos, así como se establece en la Contradicción de Tesis 293/2011:

“Las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once significaron la introducción de un nuevo paradigma constitucional en México. Este cambio trascendental exige a todos los operadores jurídicos y en especial a este Alto Tribunal un minucioso análisis del nuevo Texto Constitucional, para determinar sus alcances y reinterpretar aquellas figuras e instituciones que resulten incompatibles o que puedan obstaculizar la aplicación y el desarrollo de este nuevo modelo.” (Contradicción de Tesis, 293/2011, 2011)

Así como se desprende de la Contradicción de tesis 293/2011, también estipula el deber de cumplir lo pactado *“Los tratados internacionales suscritos por México obligan a todas las autoridades a llevar a cabo los actos necesarios para cumplir con las obligaciones asumidas en la implementación de las medidas que hagan efectivos los derechos humanos”*.

De tal forma que los estándares internacionales del derecho a la educación aquí presentados serán analizados como obligatorios y vinculantes para el Estado Mexicano, mencionando cuales son los tratados que conforman el bloque de derecho a la educación, facultados por la incorporación que la misma Constitución establece en los siguientes instrumentos internacionales, los cuales se presentan en un cuadro de manera ilustrativa.

Tratados Internacionales ratificados por México	
Declaración Universal de Derechos Humanos	1948
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial	1965
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	1966
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	1979
Convención Americana sobre Derechos Humanos	1981
La Convención sobre los Derechos del Niño	1989

Declaración Mundial sobre Educación para todos	1990
Declaración de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las Personas Adultas	1997
Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”	1998
Marco de Acción de Dakar	2000

*Tabla 1.4 Tratados Internacionales firmados por México sobre el Derecho a la Educación

Es así que los tratados internacionales de los que México es parte forman parte del bloque de constitucionalidad (Rodríguez Manzo, et, al. 2013), y el desarrollo del derecho a la educación en estos instrumentos son responsabilidad del Estado su armonización y cumplimiento a nivel interno.

De tal forma que se presenta un análisis de los elementos jurídicos que conforman estos tratados internacionales en materia del derecho a la educación para observar su evolución, y atender a los elementos jurídicos que componen este derecho, para lo cual es importante analizar el contexto histórico en el campo internacional, que nos ayudará a entender la re significación de este derecho. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26 establece que:

"Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos..." (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1948)

Desde un inicio en el contexto internacional se observan elementos importantes para el derecho a la educación; Sin embargo, a través de los años el reto para los países es como desarrollarlo de manera efectiva frente a las obligaciones que adquiere de gratuidad, obligatoriedad, y accesibilidad. Desde la declaración universal se encuentran principios que consagran este derecho, sin embargo, la comunidad internacional consideró que debía de fortalecer el marco normativo de este derecho, de tal forma que posteriormente se desarrollaron una serie de tratados internacionales tendientes al fortalecimiento del derecho a la educación.

Es así que, posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965 se contempla el derecho a la educación en su artículo quinto:

"En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico... El derecho a la educación y la formación profesional..." (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1965)

Un año después, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 13³ amplía el derecho a la educación haciendo la propuesta del desarrollo de este derecho, en donde se realiza el reconocimiento de toda persona como sujeto de derecho a la educación.

México reconoce en 1993 principios importantes como: el pleno desarrollo de la personalidad humana, la capacitación de todas las personas, la utilización de todos los medios apropiados para garantizar el acceso, implantar un sistema de becas y mejorar las condiciones materiales del personal docente. El saltó que se puede observar de los elementos que se desarrollan, entre la declaración universal y el pacto, son un avance significativo en la evolución del derecho a la educación y que es hasta años más tarde que son adoptados por el Estado Mexicano.

Es importante retomar que además de la búsqueda de acceso a todos los individuos al derecho a la educación, la comunidad internacional había observado que este derecho había sido más restrictivo hacia mujeres como parte de una cultura sistemática que no permitía su pleno desarrollo. En razón

³ "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.....la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre....La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente....La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita... Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.... Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.....Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado"

a esta realidad es que la comunidad internacional acuerda la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 en la búsqueda de una mayor equidad establece en su artículo décimo el derecho a la educación y en el artículo décimo cuarto el mismo derecho en comunidades rurales, estableciendo:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación... Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas... Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales... La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza... Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios... Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos... La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente... Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia... tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales... Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional..." (Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 1979)

La búsqueda de la comunidad internacional en la creación de condiciones de igualdad, orientadas a buscar un impacto positivo en el acceso al derecho de las mujeres a la educación significaba la transformación de realidad histórica que no había alcanzado el acceso efectivo del derecho a la educación y que todavía continúa siendo un reto en la concepción cultural sobre la educación. Desafortunadamente y a pesar de los principios que consagra la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en el aspecto jurídico de la legislación mexicana sobre el derecho a la educación carece de perspectiva de género, ya que la Constitución en su artículo tercero no contempla estos principios que son necesarios para alcanzar igualdad y equidad en el desarrollo de este derecho.

En 1989 a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, la comunidad internacional frente a la problemática en el acceso y asistencia regular de los niños a la escuela en sus artículos 28 y

29⁴ contempla acciones como la asistencia financiera en casos de necesidad, la adopción de medidas para la asistencia escolar, la disposición de información y el desarrollo de la personalidad, aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus capacidades.

Es muy importante hacer un recuento desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta 1989 con la Convención de los Derechos del Niño, en donde la comunidad internacional configuró el aspecto jurídico y los alcances del Derecho a la Educación, que permitirían posteriormente permear la legislación mexicana, y que actualmente han sido escasos en las facultades jurídicas otorgadas para el cumplimiento de su responsabilidad internacional.

Una vez retomado el aspecto jurídico en la comunidad internacional sobre el derecho a la educación, y entendiendo que el problema continúa sin poder garantizar este derecho a todos los individuos, nace la preocupación por la problemática de la falta de acceso, permanencia y calidad, lo que da paso a la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos que se desarrolla en Tailandia en 1990. Como resultado del análisis de la problemática mundial del derecho a la educación concluyen con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en el cual, desde su preámbulo, hace referencia a más de 40 años de reconocimiento del derecho a la educación a través de la Declaración, y que a pesar de eso destacan cuatro realidades:

“Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria.

Más de 960 millones de adultos dos tercios de ellos mujeres son analfabetos...

⁴ "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades... Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos... Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad... Hacer la enseñanza superior accesible a todos... Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales... Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas... Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada... Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades... Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales... Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país..."

Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales.

Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el ciclo de educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir conocimientos y capacidades esenciales.” (Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990)

En el mismo preámbulo de la Declaración⁵ reconoce la problemática que causa la falta de garantizar el derecho a la educación y que se ve reflejado en graves violaciones a derechos humanos, que se traducen en problemas criminales, mortalidad infantil, carencia de oportunidades, pobreza, entre otros. Por otro lado, la Declaración Mundial de Educación para Todos, en su preámbulo y su artículo primero, reconoce:

"...La educación es un derecho fundamental para todas las personas, mujeres, hombres, de todas las edades y en todo el mundo... Cada persona—niño, niña, joven y adulto debe beneficiarse de las oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje...desarrollar sus plenas capacidades, vivir y trabajar en dignidad... mejorar la calidad de sus vidas, tomar decisiones..." (Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, 1990)

Reconocer la incapacidad por garantizar el derecho a la educación como se consagra en los tratados y declaraciones internacionales, es un primer paso para entender que las medidas que deben adoptarse deben de ser más contundentes y apegadas al marco normativo de tal forma que puedan desarrollar las herramientas tanto jurídicas como de políticas públicas que puedan dotar de contenidos y acciones que puedan desarrollar la efectividad del derecho a la educación.

Es importante además reconocer la importancia del derecho a la educación que se han realizado en otros foros internacionales, considerando este derecho como un eje fundamental para el desarrollo del cumplimiento de otros derechos que solamente pueden desarrollarse a través de la garantía del derecho a la educación.

⁵ Al mismo tiempo, el mundo tiene que hacer frente a problemas pavorosos: en particular, el aumento de la carga de la deuda de muchos países, la amenaza de estancamiento y decadencia económicos, el rápido incremento de la población, las diferencias económicas crecientes entre las naciones y dentro de ellas, la guerra, la ocupación, las contiendas civiles, la violencia criminal, los millones de niños cuya muerte podría evitarse y la degradación generalizada del medio ambiente. Estos problemas frenan los esfuerzos para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y, a su vez, la falta de educación básica que sufre un porcentaje importante de la población impide a la sociedad hacer frente a esos problemas con el vigor y la determinación necesarios.

En los esfuerzos que realiza la Organización de las Naciones Unidas, tomamos el ejemplo de Agenda 21 desarrollada en Brasil en 1992 en donde reconoce a la educación como derecho primordial estableciendo que:

"La Educación... deberá ser reconocida como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero potencial. La educación... promueve el derecho sustentable y mejora la capacidad de las personas para manejar temas como medio ambiente y desarrollo.... Los gobiernos deberían tomar pasos activos para eliminar el analfabetismo.... y expandir la participación de la mujer en todos los ámbitos.... tanto en instituciones educacionales, como para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria..." (Organización de las Naciones Unidas, 1992)

A consideración de otros temas de la agenda internacional se vincula el derecho a la educación, como un derecho que tiene un impacto sobre otros propósitos de la comunidad internacional. Por otro lado en 1995 la Declaración de Copenhague, en su compromiso número seis⁶ se comienza a hablar sobre el derecho a una educación de calidad, plazos específicos para erradicar el analfabetismo, vínculo entre el mercado laboral y las políticas educativas y la utilización de la tecnología.

Retomando el tema de perspectiva de género en el derecho a la educación la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing⁷, organizado por ONU Mujeres apunta que no han alcanzado la

⁶ "Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad... Formularemos y fortaleceremos estrategias nacionales con plazos precisos para erradicar el analfabetismo y universalizar la educación básica, que comprende la educación en la primera infancia, la educación primaria y la educación para analfabetos en todas las comunidades, en especial y si ello es posible mediante la introducción de idiomas nacionales en el sistema docente, y mediante el apoyo de los diversos medios de educación no oficial, procurando alcanzar el más alto nivel posible de educación...Garantizaremos el pleno e igual acceso a la educación... Fortaleceremos los vínculos entre el mercado laboral y las políticas educacionales... Fortaleceremos las organizaciones intergubernamentales que utilizan diversas formas de educación para promover la cultura; difundiremos información a través de la educación y los medios de comunicación; ayudaremos a difundir la utilización de tecnologías; y promoveremos la formación técnica y profesional y la investigación científica... intensificaremos y coordinaremos el apoyo internacional a los programas de educación y salud basados en el respeto de la dignidad humana y centrados en la protección de todas las mujeres y niños....

⁷ La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños... Medidas que han de adoptar los gobiernos... Promover el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación... Asegurar el acceso universal a la

igualdad de género, y en relación al derecho a la educación, es considerado como el instrumento indispensable para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Además, desarrolla principios como la educación no discriminatoria, reducir la tasa de analfabetismo femenino, elaborar y aplicar políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres que retornen al mercado de trabajo.

Por otro lado, en la UNESCO se observa en la afirmación de Amán de 1996, la concepción de la educación como poder, para establecer la democracia y el desarrollo en la búsqueda de justicia social, considerando que:

"La educación da poder. Es la clave para el establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo la cual es tanto sustentable como humana y basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar en el mundo moderno" (Afirmación de Amman 1996). (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. UNESCO, 1996)

Por su parte la Declaración de Hamburgo sobre el Aprendizaje de las Personas Adultas de 1997 posicionando al derecho a la educación como la clave del siglo XXI, en un mundo donde los conflictos de violencia sean sustituidos por el dialogo y la paz. Además, integra varias directrices sobre su desarrollo como la cultura de paz, diversidad e igualdad, alfabetización de adultos, integración y autonomía de la mujer, entre otros.

En el Marco de Acción de Dakar del año 2000, se realiza diez años posteriores a la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en esta ocasión la evaluación se presenta en relación a la evaluación regional de los países en seis regiones, en el caso de la última región celebrada en Santo Domingo conocida como Conferencia de las Américas sobre Educación para Todos, teniendo como objetivo la creación de planes nacionales desarrollados antes del 2002.

enseñanza básica... Reducir la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de la tasa de 1990... Proporcionar acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y procurar lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de dicha enseñanza, para el año 2000... Elaborar y aplicar políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo... Establecer sistemas de educación y capacitación no discriminatorios... (Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 69, 80, 81, y 82)

Al mismo tiempo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000 se adoptan los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que consagran en su segundo objetivo lograr la enseñanza primaria universal, lo que en el año 2015 se convirtió en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual se estipuló en su objetivo cuarto como Calidad en la Educación.

Si bien se puede observar que la práctica mediática de la Organización de las Naciones Unidas, así como los diferentes ordenamientos jurídicos internacionales han permeado el desarrollo del derecho a la educación, llevando a tener una interpretación más amplia en la evolución del derecho y en la identificación de los problemas que no han permitido dar un cabal cumplimiento a este derecho, y con la reforma al artículo primero constitucional en el 2011, una responsabilidad más contundente para el Estado Mexicano, que a pesar de adquirir la responsabilidad internacional de manera previa, este paso jurídico de reforma no deja duda alguna sobre la interpretación extensiva del artículo tercero constitucional.

UNICEF México considera que la Educación de calidad es uno de los principales motores para el desarrollo del país, por lo que esta organización reconoce los logros que se han alcanzado en las últimas décadas, llegando a cubrir casi la totalidad de la educación primaria, reconociendo la importancia de la prueba ENLACE, que se realiza cada año, teniendo un sistema de medición del desempeño escolar. Sin embargo, UNICEF reconoce que existen grandes retos que se tienen que afrontar apuntado que:

“No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en la educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2007 señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que de la población de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y 2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.”⁸

El desarrollo de los principios que consagra el derecho a la educación que acabamos de analizar, son derechos *erga omnes*, y por tal motivo deben de ser garantizados a cada ser humano, desde la dimensión individual que se establece en la Constitución desde 1993, y en los tratados internacionales desde 1966, ya que estos principios hablan de todas las personas sin excepciones, además de garantizar que el acceso al derecho debe de ser en igualdad de circunstancias. En este punto de partida se observan las cifras que presenta UNICEF mostrando una brecha importante

⁸ UNICEF, México (2007). “Educación” en: <http://www.unicef.org/mexico/spanish/educacion.html>

para dar cumplimiento a quienes no asisten a la escuela; sin embargo, además de la estadística que se presenta, se debe tomar en cuenta la situación jurídica del acceso de los ciudadanos para garantizar su derecho a la educación en igualdad de circunstancias, de acuerdo al texto constitucional.

Para entender la importancia del desarrollo del derecho a la educación, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación Katarina Tomaševski (2001), en su Informe sobre el derecho a la educación realiza aportaciones muy importantes para el entendimiento de los derechos humanos, por lo que considera:

“Muchos derechos individuales, especialmente los asociados al empleo y la seguridad social, están fuera del alcance de quienes han sido privados de educación. La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola ese derecho.”

De tal forma que no se puede prescindir del cumplimiento de un derecho indispensable, que pone en riesgo el desarrollo de una multiplicidad de derechos, por lo que para Katarina Tomaševski (2001) *“Existe pues un gran número de problemas de derechos humanos que es imposible resolver a menos que se considere que el derecho a la educación es la llave que abre paso a otros derechos humanos.”*

México es parte del sistema interamericano de derechos humanos, en donde se ha desarrollado el tema del derecho a la educación, es así que México es parte de la Organización de los Estados Americanos desde su creación en 1948, y aceptó en 1998 la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) en 1981 con su firma y ratificación.

En este sentido se analiza el artículo 26 de la CADH, que versa sobre el desarrollo progresivo, cuyo contenido es el siguiente:

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el

Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.” (CADH, 1969)

Así mismo el sistema interamericano con base en el artículo anteriormente mencionado realiza el protocolo adicional a la CADH, en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es denominado “Protocolo de San Salvador”, el artículo 13^º de dicho protocolo contempla el derecho a la educación.

Retomando algunos de los principios que consagra este protocolo, podemos observar elementos indispensables en el desarrollo del derecho a la educación, algunos de ellos muy similares a los que se consagran en la constitución, primero, la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana; segundo, la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad para lograr una subsistencia digna; y tercero, la educación debe de ser gratuita y accesible para todos.

Por otro lado, el mismo protocolo en su artículo décimo noveno versa sobre los medios de protección de algunos de los derechos contemplados, dentro de los cuales se encuentra el derecho

⁹ **1.** Toda persona tiene derecho a la educación. **2.** Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. **3.** Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. **4.** Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. **5.** Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.

a la educación, permitiendo que sea justiciable ante un procedimiento contencioso, el cual específicamente establece que:

“6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

En este sentido la Corte IDH ya ha admitido el análisis de la violación del artículo 13 del Protocolo de San Salvador (Caso de las niñas Jean y Bosico vs. República Dominicana, 2005), y si bien no ha determinado su violación, se considera que todavía existe un amplio camino por trazar la justiciabilidad de este derecho, y que su funcionamiento y accesibilidad sea compatible con los estándares de derechos humanos que se contemplan en los estándares internacionales. Además la Corte IDH consideró la importancia del derecho a la educación en el caso de la Comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, en donde la Corte IDH en donde especifica que el derecho a la educación puede revertir la vulnerabilidad de una comunidad, afirmando que:

“...reconocía y valoraba positivamente las iniciativas tomadas por el Paraguay para proporcionar alimento, atención médico-sanitaria y materiales educativos a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, sin embargo, considera que estas medidas no han sido suficientes ni adecuadas para revertir su situación de vulnerabilidad, dada la particular gravedad del presente caso.” (Caso Comunidad Indígena Yakyé Axa vs. Paraguay, 2005)

Como se puede observar el derecho a la educación adquiere un sentido más profundo, al momento de hacer un análisis del largo camino y lucha que en la misma comunidad internacional desde 1948, en donde se ha observado que su concepción se ha transformado y evolucionado de tal forma que permite tener elementos jurídicos a partir del cual se puede reconfigurar este derecho, hacia una integración más amplia, entendiendo que forma parte del *Corpus Iuris* del derecho a la educación en México, y es obligatorio su desarrollo en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma de la CPEUM.

Para cerrar este capítulo es pertinente hacer una recopilación de los tratados internacionales en materia de educación en el recuento de los preceptos jurídicos que contiene, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26 observamos elementos que desde sus

inicios consideraban que toda persona tiene derecho a la educación, el principio de gratuidad, y la importancia del acceso a la educación técnica y profesional, así como un compendio de valores que constituyen el derecho, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965 buscando la eliminación de la discriminación y el derecho a la educación y formación profesional.

Un gran avance en la comunidad internacional fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 13 amplía el derecho haciendo un reconocimiento de toda persona como sujeto de derecho a la educación, que tiene como objetivo principal el pleno desarrollo de la personalidad humana, capacitación de todas las personas, garantizar el acceso, sistema de becas y mejorar las condiciones materiales del personal docente.

En la preocupación de la comunidad internacional el tema de la igualdad, crea Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 que busca la eliminar la discriminación contra la mujer y además asegurar sus derechos de educación, acceso profesional, eliminación de conceptos de estereotipos.

Al momento de hacer visible otro grupo vulnerable identificado en 1989, se desarrolla la Convención sobre los Derechos del Niño, acciones como la asistencia financiera en casos de necesidad y la adopción de medidas para la asistencia escolar.

Es muy importante mencionar que la concepción y evolución del derecho a la educación, materia de estudio del presente trabajo, a pesar de su evolución la comunidad internacional a través de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 reconoce los grandes retos para garantizar este derecho, de tal forma que se convierte un tema primordial los mecanismos que asegurarán el cumplimiento jurídico de las obligaciones adoptas.

En conclusión, de este primer Capítulo se ha dibujado una línea el proceso del génesis, evolución y transformación del derecho a la educación en materia Constitucional y de Tratados Internacionales, en donde se presentaron los principales elementos jurídicos que componen este derecho en el sistema jurídico mexicano.

Al mismo tiempo la construcción del concepto del derecho a la educación a partir de las reformas constitucionales, las aportaciones de los académicos y la incorporación de los tratados

internacionales a partir de la reforma del artículo primero de la CPEUM, ha permitido tener una constitución más amplia en relación a las obligaciones del Estados, y a los derechos de las personas. Sin embargo, el objeto del derecho a la educación no se limita al entendimiento de su parámetro jurídico, sino que además su ámbito de aplicación y efectividad se convierte en un elemento indispensable, así como se consideró en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990.

La reflexión que se realiza en el camino que la comunidad internacional desde 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el año 2011 en caso de México, en donde se presentan reformas contundentes en la interpretación del *Corpus Iuris* de los Derechos Humanos, permite observar un marco normativo extenso sobre la configuración del derecho a la educación, el cual debe de ser integrado a la concepción jurídica del derecho a la educación.

CAPITULO SEGUNDO

DESARROLLO DEL CONCEPTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, A TRÁVES DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRIBUNALES

En el capítulo primero se observó el desarrollo del derecho a la educación, a partir de su evolución a través de la historia hasta llegar a convertirse en un derecho garantista que abrió paso a posibilidades jurídicas de acceso, que durante muchos años eran insuficientes para un desarrollo adecuado en donde el Estado asumiera sus obligaciones. En este sentido, resaltando a la **T.N.** que aporta la creación de nueva jurisprudencia a través de los tribunales locales e internacionales que imparten justicia.

A través del presente capítulo se analizan algunos casos que han marcado un precedente importante en el tema de la educación.

Es importante mencionar que si bien el presente trabajo tiene como objetivo conocer el génesis y evolución jurídica del derecho a la educación desde la CPEUM de 1917 hasta la Reforma del artículo primero Constitucional en el 2011, los casos que se presentan en este capítulo sirven como un marco de referencia en dos sentidos, primero para observar el impacto que ha creado el nuevo concepto del derecho a la educación en el ámbito jurídico del sistema mexicano e internacional de impartición de justicia, y por otro identificar las nuevas concepciones del derecho a la educación a partir de las sentencias de los tribunales, con base en la **T.N.**

Para poder garantizar un desarrollo efectivo del derecho a la educación, como se ha identificado a partir de los elementos revisados en la CPEUM y los tratados internacionales de los que México es parte, es importante tomar en consideración que los casos que se presentan en este escrito son excepcionales, debido a la falta precedentes jurisprudenciales sobre el derecho a la educación, tanto en el ámbito interno como en el internacional, por consiguiente la jurisprudencia que se encuentra hasta hoy sirve como marco de referencia hacia una mejor interpretación del alcance del derecho a la educación, que sirve como punto de referencia hacia su fortalecimiento jurídico en su implementación.

Para delimitar el rol de la Jurisprudencia, Robert Alexy (1993) establece que las normas de derecho constitucional son aquellas que provienen del texto constitucional, así como las normas adscriptas, entendidas como normas que son resultado de una ponderación iusfundamentalmente correcta efectuada por el órgano que ejerce el control constitucional, así se presenta la jurisprudencia como una extensión interpretativa del derecho.

Anteriormente se presentó como el Estado Mexicano forma parte del sistema interamericano, en este sentido la Corte IDH tiene competencia material para conocer las violaciones al artículo 26 de la CADH, de tal forma que las sentencias emanadas de la Corte IDH son un marco legal para México en el desarrollo y cumplimiento de los derechos.

En este sentido, el caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana se presentaron violaciones al artículo 26 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre el derecho progresivo y derechos del niño respectivamente, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó como violatorio el artículo 26 de desarrollo progresivo de la misma Convención Americana, en donde la Corte IDH no entró al análisis de fondo; Sin embargo, en su sentencia establece que las condiciones educativas en las que estaban las niñas Yean y Bosico se requería de medidas especiales para garantizar el derecho a la educación. (Caso de las niñas Jean y Bosico vs. República Dominicana, 2005)

Si bien es cierto, el caso comentado en el párrafo anterior, refleja violaciones a diversos derechos, estableciendo la Corte IDH que las niñas se encontraban en estado vulnerable, de tal forma que eran susceptibles de que sus derechos fueran violentados, es por tal motivo es importante considerar dos aspectos en la configuración del derecho a la educación, por un lado, cuando el derecho a la educación no cumple con sus objetivos principales, generalmente es porque los ciudadanos pueden encontrarse en una situación de violación sistemática de sus derechos o en la posibilidad de no poder acceder a los mismos; y por otro lado, cuando los ciudadanos se encuentran imposibilitados a tener garantizado su derecho a la educación, existe una alta posibilidad de que su desarrollo como persona no sea posible, y que las condiciones de vida sean perpetradas.

Es por eso que la Corte IDH refiere la importancia de la protección especial de los niños, interpretado a la luz de la Convención para los Derechos del Niño y del Protocolo de San Salvador,

en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la Convención, porque es responsabilidad del Estado proveer educación para todos los menores, en un ambiente y condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual. (Caso de las niñas Jean y Bosico vs. República Dominicana, 2005)

En este sentido el derecho a la educación debe de ser entendido como se establece en el artículo vigésimo sexto de la CADH en un sentido progresivo, así para Abramovich & Courtis (2002) la progresividad es entendida como una obligación que tienen los Estados, en donde existe un *avance gradual y constante* en la aplicación efectiva de los derechos, y por otro lado la obligación de *no reversibilidad*, por lo que todas las posibles medidas que un Estado quiera implementar, sin una justificación adecuada para disminuir los derechos Económicos, Sociales y Culturales están prohibidos por este principio.

En el ámbito internacional existen distintas herramientas que sirven como interpretación del alcance de los derechos, de tal forma que el Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos en Colombia (2003), considera que “*Las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales equivalen a la jurisprudencia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dado que el Comité es el órgano autorizado de interpretación.*” Lo que significa que a través de otros mecanismos de interpretación podemos ampliar las expresiones jurídicas del derecho, que además son consideradas como pertinentes desde una perspectiva de la T.N.

La Observación General número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1990), establece que los Estados tienen obligaciones de **comportamiento** como de **resultado**, por lo que citando a esta observación “*los Estados se comprometen a garantizar que los derechos pertinentes se ejerzan sin discriminación*”, las medidas que se adopten debe de realizarse de manera inmediata. Por lo que debe entenderse que los derechos que propician el acceso a otros derechos son de suma importancia para lograr su cumplimiento progresivo.

Así como se comenta en el párrafo anterior debe de considerarse el concepto de derecho a la educación, ya que el Estado tiene la obligación desde la concepción del derecho a tomar medidas de comportamiento, pero al mismo tiempo alcanzar el resultado conforme a la normatividad establecida.

Además, como se ha comentado de manera previa y se continúa reiterando el derecho a la educación tiene una interrelación con otros derechos fundamentales, en el caso de los niños el derecho a la vida incluye *“el deber del Estado de realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar el acceso de los niños a los DESC y el disfrute de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este cumplimiento los mayores recursos disponibles”*. En vinculación con el derecho a la educación, configura acciones de prevención *“de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad”* (Opinión Consultiva OC-17/02, 2002).

Es así que nuevamente la Opinión Consultiva No. 17/02 retoma algunos criterios que son indispensables para la concepción del derecho a la educación:

“En suma, la educación y el cuidado de la salud de los niños suponen diversas medidas de protección y constituyen los pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna por parte de los niños, que en virtud de su inmadurez y vulnerabilidad se hallan a menudo desprovistos de los medios adecuados para la defensa eficaz de sus derechos.” (Párrafo 86)

Así mismo la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Instituto de Reeducción del Menor vs. Paraguay (2004) contaban con la existencia de un programa educativo, sin embargo, era deficiente, debido a la carencia de maestros y recursos que permitirán un desarrollo del derecho a la educación oportuno, a lo que la Corte IDH concluyó:

“El Estado no cumplió efectivamente con su labor de garante en esta relación especial de sujeción Estado – adulto/niño privado de libertad, al no haber tomado las medidas positivas necesarias y suficientes para garantizarles condiciones de vida digna a todos los internos y tomar las medidas especiales que se requerían para los niños. Más aun, fue el Estado quien permitió que sus agentes amenazaran, afectaran, vulneraran o restringieran derechos que no podían ser objeto de ningún tipo de limitación o vulneración, exponiendo de manera constante a todos los internos del Instituto a un trato cruel, inhumano y degradante, así como a condiciones de vida indigna que afectaron su derecho a la vida, su desarrollo y sus proyectos de vida, configurándose de este modo una violación...”

En el caso de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación Katarina Tomaševski (2001), en su Informe sobre el derecho a la Educación realizó una compilación de jurisprudencia sobre el derecho a la educación en diferentes países alrededor del Mundo, las cuales se retoman de manera que puedan ilustrar hacia donde ha avanzado el derecho a la educación en

otras partes del mundo, y que nos puedan servir como punto de referencia en relación a la garantía de los derechos. Algunos aspectos importantes que considera la autora:

“Conviene subrayar dos aspectos de la jurisprudencia existente. Primero, hay una proporción inversa entre la disponibilidad de la educación y el acceso a los recursos contra su denegación o violación, es decir, que los litigios tienden a quedar limitados a las partes del mundo en las que la educación es a la vez disponible y accesible. Conseguir por lo menos la educación primaria para todos los niños sigue siendo, pues, una prioridad permanente y es urgente adoptar medidas internacionales para que el derecho a la educación sea verdaderamente universal. Segundo, una parte reducida de la jurisprudencia existente ha sido obra de los activistas o de las organizaciones promotoras de los derechos humanos.” (Párrafo 65, Pág. 28)

Por otro lado Katarina Tomaševski (2001), comenta que existe la opinión generalizada de que el derecho a la educación no puede reclamarse ante tribunales, porque este derecho pertenece a la clasificación de derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo la relatora asiente que: *“el derecho a la educación tiene componentes civiles y políticos y que éstos son objeto de intensos litigios en todo el mundo en el plano interior y en el internacional.”*

Si bien es cierto que el derecho a la educación en el ámbito internacional tiene todavía un gran camino que recorrer, y las Cortes no han extendido sus facultades hacia la justiciabilidad de este derecho, es importante que podamos avanzar hacia una cultura de la legalidad que pueda permear el sistema jurídico en el cumplimiento de los derechos a través de medidas judiciales.

En el caso del sistema europeo se destaca el caso Tarantino y otros vs. Italia, con sentencia en el 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el asunto versa sobre violación al artículo 2 del Protocolo número 1 del Convenio que establece *“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.”*.

En los alegatos ocho personas que solicitaban el acceso a educación universitaria, en el caso específico de la señora Tarantino quien no aprobó su examen de admisión a la facultad de medicina 2007, 2008, y 2009, el tribunal europeo después de hacer un análisis de fondo determinó que no existe violación al artículo 2 del Protocolo número 1 del Convenio.

Es importante precisar dos aspectos de relevancia que se relacionan con el derecho a la educación por el Tribunal Europeo, primero, el entrar al análisis de fondo sobre violaciones relacionadas a la

accesibilidad al derecho a la educación es un parámetro importante ya que existe un aspecto jurídico que permite que este derecho sea justiciable, y segundo, que los hechos de cada caso en particular podrán determinar o no la responsabilidad de los Estados parte.

Por otro lado encontramos el caso de Folgero y otros vs. Noruega con sentencia en junio de 2007, por nueve ciudadanos noruegos, la demanda fue presentada por padres de familia que no profesan la religión cristiana, debido a que a los diez años tienen la enseñanza obligatoria del estudio del cristianismo y la religión. En este sentido y en conjunto con la valoración realizada por otros organismos internacionales el Tribunal Europeo consideró que la educación era discriminatoria y que no propiciaba la libertad de pensamiento y religión, por lo que determinó que existieron violaciones al artículo 2 del Protocolo número 1.

Si bien es cierto que las sentencias no tienen que ser favorables en todos los casos, se observa que el avance sobre la interpretación de los derechos humanos, es más contundente cuando se encuentra fuertemente relacionado con otros derechos que son vulnerados. En este sentido el desarrollo del derecho a la educación puede ser analizado a la luz de las posibles repercusiones y limitaciones de otros derechos, o específicamente al no cumplimiento del mismo derecho.

La tarea para la administración de justicia no es sencilla y el grado de complejidad se incrementa cuando la violación de los derechos se relaciona con otros, lo que significa que los criterios deben de ser más amplios, y aplicables a casos específicos, los cuales se pueden observar en cortes locales de países que sirven como marco de referencia de la justicia interna.

2.1 CASOS DE CORTES NACIONALES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

En este segmento se retoman algunas de las experiencias sobre el derecho a la educación, las cuales son diversas, y se utilizan con el fin de que puedan ilustrar el avance en esta materia. Aunque en países como España, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Brasil y Colombia existen acciones para la protección jurisdiccional de derechos que son considerados:

“derechos económicos, sociales y culturales, en México lamentablemente carecen de protección, no tienen reconocimiento de acción colectiva, tan sólo existe la acumulación, únicamente ha existido

preocupación por tutelar los derechos de los consumidores, esto por no poderse determinar la afectación personal, actual y directa, como en el Juicio de Amparo.” (Schettino Piña A. , 2005)

Lo mencionado por Schettino publicado el 2005 tiene una referencia histórica debido a que en México no se desarrollaban litigios en este sentido; sin embargo, años posteriores esta realidad cambia, y se retoma más adelante el tema de justiciabilidad del derecho a la educación en México, que se destaca como un parámetro de apertura reciente a este tipo de asequibilidad de derechos sociales. (Schettino Piña A. , 2005)

Tomando como referencia al marco jurídico colombiano, encontramos la figura de “Bloque de Constitucionalidad”, el cual, tomado por la Corte Colombiana para la interpretación de los derechos tanto en el marco normativo nacional como el internacional, definiéndolo como:

“normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu.” (Sentencia de la Corte Costitucional de Colombia, 1995)

En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia considera que el derecho a la educación es fundamental, y establece que este derecho tiene que tener una aplicación inmedianta en dos escenarios:

“Cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad (lo que le otorga prevalencia sobre los derechos de los demás ciudadanos), conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución. Cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación apareja la amenaza o vulneración de otro derecho de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso.” (Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 2003)

Los dos supuestos mencionados pueden servir como un parametro de derecho comparado, para conocer cuales son las circunstancias en las cuales el derecho debe de tener una aplicación inmediata de protección. Al mismo tiempo, para el Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos (2003), existen 4 factores que son determinantes para entender el alcance

del derecho a la educación: derecho de disponibilidad¹⁰, derecho de acceso¹¹ derecho a la permanencia¹² y derecho de calidad¹³, los cuales sirven como un marco de referencia para la interpretación y alcance del derecho a la educación.

Uno de los casos del Tribunal Supremo de Colombia fue el de dos jóvenes que no se les permitió que accedieran a su educación en clases nocturnas por ser homosexuales, tenían que buscar una escuela nocturna porque eran demasiado pobres para poder pagar su educación de jornada completa. El Tribunal estableció que la escuela carecía de valores de tolerancia y respeto de la diversidad, ya que la escuela argumentaba que la homosexualidad es un pecado. (Pablo Enrique Torres Gutiérrez y José Prieto Restrepo c. Instituto Ginebra La Salle, 1998)

Los casos comentados en relación a la Corte Colombiana ilustran la forma de impartir justicia por los tribunales en relación al derecho a la educación en 1998 y 2003, así como precedentes de la interpretación del derecho a la educación es más avanzado que el sistema de justicia en México.

Katarina Tomaševski (2001) comparte dos casos, uno de Uganda y el otro de Sri Lanka, en donde los tribunales se han pronunciado en temas relacionados con la educación:

¹⁰ Todo menor de edad tiene el derecho fundamental a la existencia de un sistema educativo público que garantice la planta de docentes mínima para atender las necesidades del servicio y las escuelas suficientes en el ámbito nacional para los niveles de enseñanza básica (hasta el noveno grado). El derecho de disponibilidad implica también el derecho de los particulares para fundar establecimientos educativos, siempre que tales instituciones estén provistas de personal docente suficiente y que sus programas coincidan con los fines constitucionales y legales de la educación. La realización de la disponibilidad es necesaria para asegurar los demás derechos, particularmente el acceso y permanencia en el sistema educativo.

¹¹ Todo menor de edad tiene el derecho fundamental de acceder a la educación pública básica obligatoria gratuita. A pesar de que la educación es obligatoria sólo hasta los 15 años, se ha hecho extensivo el derecho hasta la finalización de la minoría de edad. Por lo tanto, si un menor de 18 y mayor de 15 años demandara el acceso a la educación pública básica gratuita, pervive el amparo constitucional por tratarse de un derecho fundamental, y el Estado estaría en la obligación de concederle un cupo en una institución pública por tratarse de un derecho de aplicación inmediata.

¹² Todo menor de edad tiene el derecho fundamental a permanecer en la educación básica pública gratuita, y en ningún caso puede ser excluido. Si el niño se encuentra en un establecimiento educativo privado, el derecho a la permanencia lo protege de la exclusión durante el año escolar, a pesar de la morosidad de los padres en el pago de matrículas y pensiones. El derecho a la permanencia de los mayores de edad está sujeto a la aprobación académica y disciplinaria del año; por ello, puede ser privado del beneficio de permanecer en una institución educativa determinada cuando existan elementos razonables - incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias-.

¹³ El contenido mínimo no negociable del derecho fundamental a la educación no se agota en los derechos de disponibilidad, acceso y permanencia en el sistema educativo. La Corte Constitucional también ha incluido el derecho a la calidad de la educación, que consiste en el derecho del estudiante a alcanzar los objetivos y fines consagrados constitucional y legalmente, independientemente de sus condiciones socioeconómicas o culturales, y a desarrollar las capacidades necesarias para producir conocimiento.

“La Comisión Ugandesa de Derechos Humanos se ha ocupado de un caso de castigo físico de un escolar por sus maestros, que reaccionaron aparentemente al intento del muchacho que se proponía entrar en la sala de los profesores para cumplir el encargo de otro maestro que le había pedido que trajera algún objeto. Al resolver el asunto, la Comisión ordenó el pago de una indemnización financiera al muchacho¹⁴. En abril de 1998 el Tribunal Supremo de Sri Lanka determinó la constitucionalidad de una ley que tenía por objeto prohibir, entre otros actos, los insultos (con ocasión de las novatadas, intimidaciones o vejámenes) dentro de las instituciones educativas. El tribunal ha afirmado que se debe prohibir la humillación de los estudiantes, en especial de los novatos, por medio de abusos verbales y ha añadido que: durante demasiado tiempo las novatadas han sido crueles, inhumanas y degradantes. Nuestra sociedad no ha podido poner fin a las causas fundamentales de las novatadas ni las ansiedades, temores y frustraciones de los jóvenes que han dado lugar e impulso a la novatada”.

En este sentido los casos que observamos permiten tener una visión de la forma en la que los tribunales de otros países han interpretado sobre el derecho a la educación, y los parámetros jurídicos permiten entender cuáles son los alcances de la interpretación de este derecho. Por un lado encontramos una reparación del daño a través de una remuneración económica, y por otro la prohibición de conductas dentro de instalaciones educativas, ambas interpretaciones y alcance de derecho, se pueden considerar como medidas que se han desarrollado por tribunales en la protección del derecho a la educación en relación con otros derechos fundamentales.

2.2 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN MÉXICO DESDE LOS TRIBUNALES MEXICANOS

De manera conjunta con el análisis del artículo tercero constitucional, en relación al primero del mismo ordenamiento jurídico, se observa la evolución del derecho a la educación en el ámbito internacional en cortes locales de otros países quienes han interpretado a órganos de administración de justicia el alcance de este derecho.

La justiciabilidad del derecho a la educación es novedoso en el sistema judicial mexicano, esto se entiende a partir de los casos presentados anteriormente y en México se puede observar pocos

¹⁴ Comisión de Derechos Humanos de Uganda, Mpondi Emmanuel c. Nganwa High School, queja N° 210 de 1998, decisión de 2 de julio de 1999.

casos en ha desarrollado; Sin embargo, estos precedentes se convierten en un tema de gran importancia hacia la construcción de un sistema con mayor impacto en el derecho a la educación.

La autora Ruíz Muñoz (2015) en su obra *“Derechos a la Educación: Política y Defensa de la escuela Pública”*, comenta que se debe *“fijar la atención en los aspectos relevantes y críticos de la actual legislación educativa –Constitución Política y Ley General de Educación”*. Debido a que la autora comenta sobre *“la necesidad de fortalecer la legislación vigente, en crear mecanismos jurídicos para sancionar el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades y proteger a los afectados, y de este modo la justiciabilidad es un elemento que se incorpora al discurso sobre el derecho a la educación”*.

Lo destacado por Ruíz Muñoz es de gran relevancia para el presente documento, debido a que su de su investigación recientemente publicada en el 2015, existe una reflexión sobre la urgencia del fortalecimiento de la legislación vigente, tanto de la Constitución como de la Ley General de Educación, esto con el fin de que pueda ser realmente justiciable y alcanzar el cumplimiento jurídico del precepto constitucional.

En el tema la justiciabilidad el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor en su voto concurrente en un caso de la Corte IDH durante el 2013 afirma que:

“eficacia normativa plena del artículo 26 del Pacto de San José y así otorgar transparencia y tutela real a los derechos económicos, sociales y culturales, lo que exige aceptar su justiciabilidad directa y, de ser el caso —como sucede con los derechos civiles y políticos—, llegar eventualmente a declarar la violación autónoma de estos derechos, en relación con las obligaciones generales previstas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana cuando las circunstancias del caso concreto así lo exijan.” (Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en la sentencia Suárez Peralta Vs. Ecuador, 2013)

En el caso de México en relación a la jurisprudencia, si bien no ha existido un gran análisis sobre el alcance e interpretación del derecho a la educación por parte de los tribunales, a continuación, se presentan algunos casos que marcan un punto de referencia importante para el desarrollo de este derecho y que son el punto de partida fundamental para el desarrollo y cumplimiento de este derecho.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 323/2014 por la Asociación Civil Aprender Primero, resolvió se puedan impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación, y también obliga a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar

y concluir procedimientos contra funcionarios públicos locales y federales que participen en el desvío de recursos destinados a la educación.

Recientemente durante el 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con expediente 19/2016 atrajo un caso para determinar el derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas, para tal efecto la Suprema Corte declaró que para resolver el caso tendrá que hacer un análisis a fondo sobre los derechos constitucionales y los tratados internacionales de los que México es parte, para lo cual en el juicio de amparo se interpretará sobre los artículos 2, 3 y 4 constitucionales, así como el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sobre el caso comentado en el párrafo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un comunicado oficial de mayo de 2016, estableció que se pronunciaría sobre las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación, y además el tema tiene una gran relevancia que su sentencia podría encaminarse a hacia la creación y modificación de políticas públicas en la materia.

Por otro lado, el juzgado octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió el juicio de amparo 1302/2013, el cual emitió medidas cautelares para la protección de una niña que sufría de acoso escolar, además marcó como precedente que las autoridades que no cumplan las sentencias de amparo pueden ser destituidas de su cargo. En este sentido se desarrolló un análisis del artículo octavo constitucional y sobre tratados internacionales que versan sobre el interés superior del menor.

Si bien la apertura en el tema de las sentencias de los tribunales en México recién ha iniciado su desarrollo en relación a la interpretación del alcance del derecho a la educación, además de entrar al análisis de fondo de los estándares internacionales en la materia, esto permitirá tener un impacto jurídico importante en el cumplimiento de los preceptos constitucionales e internacionales de este derecho.

En el caso de México sobre estos tres casos presentados se puede observar la relevancia que ha comenzado a tomar el análisis de fondo de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso del derecho a la educación, y así identificamos tres supuestos jurídicos en donde el sistema de justicia está participando en relación a este derecho. Primero, sobre desvío de recursos

destinados a la educación, segundo, educación aceptable para comunidades indígenas, y tercero, sobre acoso escolar.

El avance ha sido significativo, pero no suficiente y aunque es reciente, causa un precedente importante que tiene su origen en la reforma constitucional del artículo primero constitucional en el 2011, y se visualiza en la re significación de la interpretación de tratados internacionales en la jurisdicción interna, la cual de manera progresiva ha ido permeando el sistema jurídico del ámbito internacional al local.

A pesar de estos avances que han sido significativos, a la luz de la Teoría Neoconstitucional todavía la interpretación del alcance a este derecho no ha sido suficiente para garantizar el cumplimiento de los parámetros constitucionales y de tratados internacionales, por lo que el tema de justiciabilidad queda una amplia tarea para continuar su desarrollo en el aspecto jurídico, sobre la apertura de leyes más específicas que permitan su protección, en relación al único ordenamiento jurídico en materia de educación que es la Ley General de la Educación.

A manera de conclusión del presente capítulo es importante retomar el objetivo de mismo, debido a que desde su introducción se comenta que los casos presentados y analizados tienen un doble objetivo, por un lado, entender que la concepción y evolución del derecho a la educación ha permitido que se desarrollen este tipo de casos tanto a nivel local como internacional, lo que significa que esta transformación tiene componentes de suma importancia que permite un desarrollo efectivo.

Haciendo un recuento de los elementos jurídicos desarrollados en el presente capítulo como parte de una incorporación de la construcción de un derecho más amplio y garantista que parte de la **T.N.** que permite la incorporación de las interpretaciones en las sentencias como parte del *Corpus Iuris* del derecho a la educación.

En el sistema interamericano se desarrolló el caso de las niñas Yean y Bosico (Caso de las niñas Jean y Bosico vs. República Dominicana, 2005), en donde la Corte IDH reconoce que al no garantizar el derecho a la educación, existe una alta posibilidad de que su desarrollo como persona no sea posible, y que las condiciones de vida sean perpetradas. En el caso Instituto de Reeducción del Menor vs. Paraguay (2004), la Corte IDH especifica que el Estado debe de tomar medidas

positivas para garantizar el derecho a la educación, sin embargo el no tomar medidas inmediatas tiene como resultado afectación al proyecto de vida.

La Opinión Consultiva comenta que el derecho a la educación posibilita vivir una vida digna, y previene de condiciones adversas, además establece que este derecho es un pilar fundamental para los niños por su vulnerabilidad (Opinión Consultiva OC-17/02, 2002).

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación Katarina Tomaševski (2001), en su Informe sobre el derecho a la Educación comenta que el derecho a la educación cuenta con elementos de derechos civiles y políticos, los cuales deben de ser objeto de intensos litigios en todo el mundo en el plano interior y en el internacional.

En el sistema europeo se destacan los casos de Tarantino y otros vs. Italia (2013), Folgero y otros vs. Noruega (2007), en el primero se dio acceso a una demanda que se fundamentaba en que a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción, y a pesar de que no fue favorable la sentencia del Tribunal Europeo, se identifica el acceso efectivo a la justicia a través de un procedimiento, en el segundo caso los padres de familia que no profesan la religión cristiana, presentaron una demanda debido a que a los diez años todos los niños tienen la enseñanza obligatoria del estudio del cristianismo y la religión, ante lo que la sentencia fue favorable para los quejos, y se puede observar que el derecho a la educación se encuentra vinculado con otros derechos.

En el derecho comparado la Corte Colombiana ha desarrollado la importancia del derecho a la educación y sus mecanismos de garantía deben de interpretarse de conformidad con sus obligaciones de garantía, en un caso de dos jóvenes que no se les permitió que accederían a su educación en clases nocturnas por ser homosexuales, el Tribunal estableció que la escuela carecía de valores de tolerancia y respeto de la diversidad (Pablo Enrique Torres Gutiérrez y José Prieto Restrepo c. Instituto Ginebra La Salle, 1998),

Katarina Tomaševski (2001) en su relatoria sobre el derecho a la educación, comparte dos casos, uno de Uganda que se relaciona a la reparación a través de una indemnización por el castigo físico de un profesor a un alumno; el segundo caso es de Sri Lanka, donde el Tribunal Supremo determina la prohibición de los insultos en las instituciones educativas.

En el caso de México en relación a la jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 323/2014 resolvió se puedan impugnar actos de autoridad que violen el derecho a la educación, obligando a la Auditoría Superior de la Federación la revisión de casos relativos al desvío de recursos destinados a la educación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso 19/2016 se encuentra determinando el derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas. El juzgado octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal resolvió el juicio de amparo 1302/2013, estableció medidas sobre el acoso escolar.

En este sentido a partir de los hallazgos encontrados a través de la investigación del derecho a la educación en el ámbito internacional y local a través de la jurisprudencia de los Tribunales se puede observar que el ámbito jurídico del derecho tiene un contexto amplio de análisis del cual se desprender obligaciones para el Estado de garantizar este derecho, de acuerdo a los estándares contemplados en el presente documento.

CAPITULO TERCERO

FACULTADES DE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Después del análisis realizado a partir de la concepción del derecho a la educación a través del artículo tercero de la CPEUM, la reforma del artículo primero del mismo ordenamiento jurídico en el 2011, las aportaciones de los académicos, y las sentencias de los tribunales, se puede observar que la evolución del derecho a la educación en su ámbito jurídico ha sido muy importante y significativo. Sin embargo, al mismo tiempo la obligación del Estado de cumplir con esta visión del derecho a la educación, que se ha revisado en este documento, es importante hacer una revisión de las leyes secundarias que permiten que estos derechos puedan materializarse.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿cómo se ha desarrollado el derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano y cuál es su alcance? es de suma importancia entrar al análisis de la Ley General de la Educación (en adelante LGE), como única ley en el ordenamiento jurídico mexicano facultada para el cumplimiento y desarrollo del artículo tercero de la CPEUM y los tratados internacionales en la materia.

En la hipótesis, se planea por un lado que la educación ha pasado por un proceso de transformación, que ha permitido un concepto más amplio de este derecho, de tal forma que en este capítulo se busca comparar los estándares constitucionales y convencionales a la luz de la reforma constitucional del artículo primero de la CPEUM de 2011, para entender si se encuentra la LGE armonizada con los nuevos estándares de derechos humanos en la materia.

En el presente capítulo se divide en dos partes, primero sobre los antecedentes que dieron paso a su creación, y posteriormente un análisis de sus ocho capítulos que las constituyen, con el propósito de tener un análisis más amplio de las facultades y limitaciones jurídicas que tiene desde su contenido jurídico del derecho a la educación.

Para profundizar sobre el alcance de la Ley General de la Educación, el “Centro de Estudios Educativos” en su publicación de 1992 “Comentario a la Ley General de la Educación” se cuestiona “¿Cuáles son los aspectos positivos, novedosos, negativos, oscuros y vacíos de Ley General de Educación?” A los que responde que:

*“las leyes no sólo sirven para dar estatus jurídico a prácticas y normas establecidas culturalmente, sino también para diseñar y realizar modelos de funcionamiento social que se perciben como ideales además de que advierten a la sociedad -particularmente a los padres de familia- sobre determinados aspectos exigibles... concluye entre otras cosas que las políticas educativas implementadas no han asegurado el acceso, la permanencia y la eficacia escolar, por lo que se hace necesario reflexionar sobre el tema de la **justicia en la educación** dado que el derecho a la educación es inalienable e impone **obligaciones al Estado y a la sociedad en General**”.* (Centro de Estudios Educativos (CEE), 1993)

El análisis realizado sobre la LGE permite tener una idea concreta sobre las atribuciones y facultades jurídicas en su contenido para observar si cumplen con las características necesarias para garantizar los derechos consagrados en el artículo tercero de la CPEUM.

3.1 ANTECEDENTES DE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Los antecedentes a la LGE en México se presentan de una manera breve de tal forma que se pueda tener una fotografía panorámica de las condiciones que vivía México antes de la creación de esta ley. El artículo tercero de la Constitución de 1857 establecía una forma muy sencilla y limitada sobre el derecho a la educación estableciendo que: *“la enseñanza es libre, la Ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir”*; (Const., 1857, art. 3ro.) posteriormente, durante el gobierno del Presidente Benito Juárez se contempla la “Ley de Instrucción Pública” en la que se estipula la educación primaria gratuita y obligatoria (UNAM, 1981) la cual nace en 1867, cuando Benito Juárez encomendó a Don Antonio Martínez de Castro, Ministro de Justicia y de Instrucción Pública, la tarea de reorganizar la educación. (Núñez Carpizo, 2010, pág. 379), la cual tuvo como resultado de un arduo trabajo en la materia, en la que se comenta que:

Fruto de las labores realizadas lo fue la Ley Instrucción Pública de 2 de diciembre de 1867, que inspirada y ordenada de acuerdo con el espíritu del positivismo, pretendió orientar y reglamentar la educación pública mexicana, desde la elemental primaria hasta la profesional, incluida la Preparatoria, que nacía como escuela independiente, por primera vez la enseñanza elemental es obligatoria y gratuita. (Núñez Carpizo, 2010, pág. 380)

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se comenta que el derecho a la educación era restringido, principalmente el acceso estaba reservado para las elites y la enseñanza superior se impartía en el

extranjero debido a que se consideraba que *“Tan atrasada era la educación superior en el país, que los más radicales políticos, como Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, ante la imposibilidad de mejorar la Universidad, decidieron cerrarla.”* (Núñez Carpizo, 2010, pág. 382) Es hasta 1910 con la reapertura de la Universidad Nacional que nuevamente se da paso a la educación superior.

De la revolución mexicana surge el constituyente de 1917, a diferencia de la Constitución de 1857, en artículo tercero constitucional tenía sus bases cimentadas en la lucha por la igualdad, y establece *“Educación gratuita, obligatoria y laica, para que todo niño mexicano tuviera acceso a ella”*. En el gobierno de Álvaro Obregón es José Vasconcelos quien realiza el diseño de educación del país desde la Universidad Nacional Autónoma de México y desde su propuesta de crear una Secretaría de Estado que se encargará de estos asuntos, la cual fue fundada como la Secretaría de Educación Pública el 25 de septiembre de 1921 (Macías Barba, 2011).

El Presidente Lázaro Cárdenas en su preocupación en el tema del campo, es quien impulsa las escuelas en las zonas rurales del país y la integración de las mujeres a las escuelas, en sus modificaciones jurídicas constitucionales en su gobierno estableció la educación como socialista, la cual tenía como precedente el trabajo desarrollado por los representantes del Partido Nacional Revolucionario, que aumentaron el presupuesto nacional de un 5% en 1933 a 15% en 1934 y 20% en 1940, esto permitió el incremento de escuelas rurales *“de las mil existentes al comenzar el sexenio a un total de tres mil al cabo del periodo. La enseñanza se caracterizaría además por una nueva orientación tanto pedagógica como filosófica a través de la implementación de la educación socialista”*. (Kapelusz-Poppi, 2007)

Una vez concluida la segunda guerra mundial, en el contexto internacional los países comenzaron a pugnar por una integración y pronunciamiento que concluyó en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, *“La protección internacional de los derechos humanos encuentra sus orígenes en la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el año de 1948, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas”* (del Toro Huerta, 2012, pág. 12) dentro de la cual se contempla el derecho a la educación, como parte de sus 30 artículos en donde se reconoció un catálogo de derechos y libertades.

Durante los sexenios de Ávila Camacho (1940 – 1946) y López Mateos (1958 – 1964) el encargado de la Secretaría de Educación Pública fue Dr. Jaime Torres Bodet quien promueve la innovación del artículo tercero Constitucional y básicamente la redacción actual de este artículo tiene su precedente en estas modificaciones y fue Dr. Jaime Torres quien eliminó el término de educación socialista implantado por Lázaro Cárdenas. (Macías Barba, 2011)

El precedente a la LGE de 1993, fue la Ley Federal de Educación de 1973, sin embargo esta ley fue sustituida debido a una serie de limitaciones en su texto jurídico en relación a las facultades que le otorgaba a la Secretaría de Educación Pública eran limitadas:

“La Ley General de la Educación en el año 1993, que vino a abrogar la llamada “Ley Federal de Educación, (de 1973), que para esas fechas no cumplía con las metas ni facultaba a la Secretaría de forma amplia para lograr su objeto por parte del estado ni tenía el control debido sobre las instituciones particulares.” (Universidad Abierta, 2012)

A partir de este momento es que inicia el funcionamiento de la Ley General de Educación en México, en donde se puede observar que previo a la misma, el proceso para cumplir los preceptos constitucionales en materia educativa era ambiguo, así que finalmente con la ley orgánica que da paso la configuración jurídica del artículo tercero de la CPEUM, damos paso al análisis de su contenido jurídico.

3.2 MARCO JURÍDICO DE LA LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN

Partiendo de la hipótesis del presente trabajo, se afirma que las facultades jurídicas de la LGE se encuentran limitadas en relación al artículo tercero de la CPEUM, y los tratados internacionales de los que México es parte en la materia. Por su parte el objetivo específico número cinco tiene como propósito hacer una revisión del contenido y las facultades de la LGE, dentro del marco del Objetivo General que busca conocer el desarrollo jurídico del derecho a la educación, siendo este ordenamiento jurídico de suma importancia en el tema.

Así sucede la publicación de la LGE el 13 de julio de 1993 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, misma que continua vigente, con algunas reformas que se realizaron previo y posterior a la reforma constitucional del artículo primero constitucional en el 2011.

La última reforma realizada a la LGE fue el 22 de marzo de 2017, se reforman el primer párrafo del artículo 2do; la fracción IX del artículo 12; la fracción III del artículo 14; los artículos 32 y 38; el primer párrafo del artículo 56; el segundo párrafo del artículo 60; el primer párrafo del artículo 61, y el artículo 62; y se adicionan la fracción VIII Bis al artículo 12; la fracción I Bis al artículo 13; la fracción III Bis al artículo 14; la fracción XI Bis al artículo 33; un cuarto párrafo, recorriéndose el actual para quedar como quinto, y los párrafos sexto y séptimo al artículo 63. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2017)

La LGE se encuentra dividida en ocho capítulos, ochenta y cinco artículos y seis artículos transitorios, el capítulo I contempla las disposiciones generales (artículos 1 al 11), capítulo II sobre el federalismo educativo (artículos 12 al 31), capítulo III sobre la equidad en la educación (artículos 32, al 36), capítulo IV sobre el proceso educativo (artículos 37 al 53), capítulo V sobre la educación que impartan los particulares (artículos 54 al 59), capítulo VI sobre la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos (artículos 60, al 64), capítulo VII sobre la participación social en la educación (artículos 65 al 74), capítulo VIII de las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo (artículos 75 al 85).

Para términos prácticos es importante que el análisis de la LGE se enfoque en las herramientas jurídicas que la dotan de contenido, para hacer justiciable el artículo tercero constitucional y los tratados internacionales, de tal forma que a continuación se presentan exclusivamente el estudio de los artículos que tienen relación a esta temática, haciendo una breve reflexión general sobre el resto de los capítulos que contiene.

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad”, así comienza el artículo segundo de la LGE, y sin duda alguna la responsabilidad que recibe el Estado en razón de su compromiso adquirido por el texto jurídico; Sin embargo, la falta de procedimientos jurisdiccionales dentro de la misma ley, no permite tener la certeza jurídica para su cumplimiento. En el primer capítulo se puede encontrar los principios, finalidades y fundamentos sobre el derecho a la educación, en donde se desarrollan temas importantes como es la gratuidad y obligatoriedad.

Entendemos que el Derecho a la Educación es fundamental para el desarrollo del individuo y a pesar de que la LGE en su artículo tercero plantea la obligación del Estado, no se establecen los medios de su justiciabilidad:

“El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.”

En el artículo 11 de la LGE se establece que *“la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas”*, sin embargo, no se establecen los procedimientos para la observancia del cumplimiento jurídico de los mismos artículos contemplados, ni las instancias jurisdiccionales para los procesos de amparo, fuera de las autoridades educativas.

El capítulo segundo versa sobre la distribución, atribuciones y competencias de los niveles de gobierno en materia de educación, los aspectos de financiamiento, y la evaluación del sistema educativo nacional.

Durante el capítulo tercero se desarrolla la equidad en la educación, y así comienza con el artículo 32 en donde estipula que las autoridades educativas establecerán las condiciones para que el derecho a la educación sea de calidad para cada individuo, mayor equidad, igualdad en las oportunidades de acceso y permanencia, comentando que estas medidas se tomarán de manera preferente en grupos y regiones con mayor rezago y a quienes se encuentran en desventaja por sus condiciones sociales y económicas.

En el mismo capítulo en su artículo 33 nombra una serie de medidas que se tomarán en relación a los grupos y personas que cumplen estas características, aquí se proponen diecisiete acciones que podrán tomarse en casos de desigualdad, estas medidas por mencionar algunas son: acciones en localidades aisladas, zonas marginadas o comunidades indígenas, programa de apoyo a maestros, desarrollo de centros infantiles, albergues, fortalecimiento de la educación especial, campañas educativas, desarrollo de programas con perspectiva de género y programas asistenciales.

Si bien las medidas mencionadas en el párrafo anterior tienen específicamente las acciones que deben de tomarse en casos concretos, no existe un mecanismo de jurídico que permita a los ciudadanos y grupos de personas para poder hacer viable este derecho, cuando se encuentran en los supuestos de no acceso o limitación del derecho a la educación.

Sin embargo también es importante reconocer el avance que contempla esta LGE, debido a que en la última reforma el 22 de marzo de 2017, en el artículo 33 se adiciona *“XI Bis.- Garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos de calidad.”* (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2017) Esta medida refleja un avance significativo en la garantía del acceso que se contempla en esta reforma, en la búsqueda de la garantía contemplada en los diferentes órganos jurídicos que forman parte del bloque constitucional de derechos en materia de educación.

El capítulo IV establece que los tipos de educación como el básico, estos son preescolar, primaria y secundaria, el medio superior que es bachillerato o niveles equivalentes y el superior que está compuesto por licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. También versa sobre temas de educación especial, educación para adultos y la formación para el trabajo, por otro lado desarrolla los planes y programas de estudio y el calendario escolar.

El capítulo V establece las bases sobre los procedimientos y condiciones de los particulares para prestar servicios educativos; en el capítulo VI de la validez oficial de estudios y de la certificación de conocimientos; y en el capítulo VII de la participación social en la educación.

Del capítulo VII se desprenden las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela contemplada en su artículo 66 de la LGE, en donde tienen que enviar a sus hijas, hijos o pupilos a cumplir con la educación desde el nivel básico hasta el medio superior. Anteriormente algunos académicos en el primer capítulo comentaban sobre la importancia de la participación de los padres en el derecho de garantizar a los menores el acceso y permanencia en la educación.

De lo anterior comentado, la LGE, nuevamente carece de procedimientos específicos en cuanto al papel que desarrollan los padres o tutores sobre el cumplimiento de este derecho, delimitando únicamente las atribuciones y funciones los consejos de participación social en la educación, y sin delimitar las obligaciones adquiridas por los mismos padres.

Una vez analizado la estructura y contenido de los primeros siete capítulos, el capítulo VIII, último capítulo de la LGE, se contemplan las infracciones, sanciones y el recurso administrativo.

En relaciones a las infracciones el artículo 75 contempla, primero, las derivadas del artículo 57 sobre obligaciones de las escuelas particulares, segundo, la suspensión del servicio educativo, tercero, sobre la no utilización de los libros de texto, cuarto, el incumplimiento de lineamientos generales, quinto, actividades comerciales no autorizadas, sexto, que pongan en riesgo la salud, séptimo, sobre la prescripción de medicamentos y octavo, sobre el servicio a personas con discapacidad, por mencionar algunos.

El incumplimiento de las medidas mencionadas en el párrafo anterior recibirá infracciones que se encuentran contempladas en el artículo 76, tales como multas y retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios.

Finalmente, en cuanto a recurso administrativo, según el artículo 80 de la LGE en comento, se establece que:

“En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación”.

El tercer párrafo del mismo artículo menciona que se puede interponer este recurso cuando la autoridad no de respuesta sesenta días a la solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios.

Es importante observar algunos aspectos de este recurso administrativo, por un lado, no se establece cuáles son los tipos de recursos que se pueden interponer, quienes pueden interponerlos y finalmente en el tercer párrafo del artículo 80, parece que este procedimiento se enfoca al reconocimiento de validez oficial de estudios.

En artículo subsecuente menciona que el recurso debe de ser por escrito ante la autoridad inmediata superior, posteriormente en el artículo 82 contempla los requisitos que deben de presentarse en la promoción del recurso, el artículo 83 sobre las pruebas, el 84 sobre la resolución de la autoridad educativa en un plazo de treinta días hábiles y finalmente el artículo 85, establece que la interposición del recurso suspende el pago de multas, y se establecen supuestos a otro tipo de sanciones no pecuniarias.

En este sentido, se puede observar el compendio de derechos que se establecen sobre la LGE, y a partir de aquí podemos delimitar si cumple con los parámetros establecidos por los capítulos anteriores en materia constitucional y sobre los tratados internacionales.

En este sentido derivados del primero y segundo subcapítulo donde se analizan los precedentes y el marco jurídico de la LGE, se puede observar que no existen bajo el concepto de derecho a la educación como se interpretó desde un inicio por autores como Edmundo Escobar y Katarina Tomasevsky, el Estado tiene la obligación de buscar los medios jurídicos efectivos para el cumplimiento de estos derechos.

Aunque también se retoman los casos que ya ha sido parte en los tribunales mexicanos sobre el derecho a la educación, en el entendimiento de que este derecho a partir de su nueva conceptualización e interpretación desde la teoría neoconstitucional y fundamentada en la fuerza que reviste por el artículo primero de la CPEUM, se están realizando avances importantes, sin embargo, es de suma importancia que el concepto del derecho a la educación pueda ser entendido en la necesidad de una reestructura de las facultades otorgadas a la LGE en beneficio de las personas.

CAPITULO CUARTO

ANÁLISIS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Ahora bien, una vez que se han presentado los cuatro capítulos que recopilaron la información en relación al derecho a la educación, a continuación, se pone en dialogo cuatro aspectos que dieron nuevos elementos a la concepción del derecho a la educación, desde su génesis y evolución hasta la reforma del artículo primero de la CPEUM en el 2011.

El objetivo del presente capitulo es poder hacer una comparación de los elementos más significativos en el derecho a la educación y analizarlos a la luz de las Obligaciones del Estado, e identificar los cambios paradigmáticos que han transformado este derecho.

4.1 REVOLUCIÓN Y EL ARTÍCULO TERCERO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1917

La revolución mexicana dio paso no solamente a las cuestiones jurídicas, las cuales tuvieron como resultado la Constitución de 1917, sino que además buscó transformar la realidad de desigualdad que se vivía en México. “[L]a historia nos muestra que cuando la riqueza es de unos cuantos, un movimiento violento destruye el estado de cosas y lo sustituye por otro más justo. Así nació la Revolución de 1910, que culminó con la Constitución de 1917.” (Terrazas, 1993) Las condiciones históricas dieron paso a la lucha de los derechos que no estaban garantizados en la práctica y solamente las élites y grupos de poder eran beneficiarios, restringiendo el acceso para la población en general, como en el derecho a la educación.

La revolución mexicana se llevó a cabo por masas de analfabetas, campesinos y obreros principalmente, sin embargo también se reconocen a grandes líderes que llevaron las riendas de la lucha en la revolución, entre ellos destacan, Francisco I. Madero, Vitoriano Huerta, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, entre otros, (Collin, 1999). Ello propició un nuevo acuerdo nacional, donde se verían representados los diferentes actores sociales, como campesinos, la clase trabajadora, el magisterio y los empleados privados y gubernamentales, quienes colaboraron en la redefinición de los términos y alcances del derecho a la educación en México, convirtiéndose en una garantía de libertad individual y en un derecho social que contribuía en la construcción del país.

El monopolio de la iglesia en el tema de la educación, era una de las premisas de la revolución para que el Estado tomará el control total de este derecho, en la pugna concreta de desplazar a las instituciones eclesiásticas que habían dominado durante siglos la enseñanza en México. (Solana, Cardiel, & Bolaños , 1981) La cual representaba una pugna desde las Leyes de Reforma:

“Es contundente al afirmar que aspecto de gran trascendencia, lo fue sin duda alguna la separación Iglesia-Estado que se dio con las Leyes de Reforma porque al separar enteramente la Iglesia del Estado ... México dio el paso más avanzado que nación alguna ha sabido dar, en el camino de la verdadera civilización y del progreso moral.” (Núñez Carpizo, 2010, pág. 377)

Así que después de los acontecimientos que dieron paso a la Revolución Mexicana, esta desembocó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sustituyó a la de 1856, este ordenamiento jurídico continua vigente en la actualidad, y en el caso del artículo tercero, no resulta una tarea sencilla su reflexión, debido a las diez reformas que ha experimentado desde 1934 hasta el 2016. Sin embargo, los matices de la composición jurídica de derecho a la educación, permite observar una evolución y transformación, en la que se puede visualizar por un lado la complejidad de los elementos que componen el derecho (Const., 1917, art. 3ro), tales como:

- el Estado a través de la educación debe desarrollar todas las facultades del ser humano;
- el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
- una educación de calidad;
- educación gratuita;

Otras características que parten del texto constitucional y posteriormente de los tratados internacionales de los que México es parte, y fueron mencionados en su capítulo correspondiente. Si se observan los elementos mencionados como constitutivos del derecho a la educación y los comparamos con el texto inicial de la Constitución de 1917, se puede visualizar una transformación radical en cuanto a la concepción de derechos adquiridos en el texto constitucional, es así que lo siguiente es lo que se establecía al inicio:

“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, al ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” (Const., 1917, art. 3ro.)

Como se presenta esta primera redacción del texto Constitucional en su artículo tercero, carecía de todo tipo de elementos de derechos humanos para poder garantizar este derecho. Sin embargo, las acciones a partir de esta primera redacción no tardaron en cristalizarse con el órgano rector que daría cumplimiento al precepto mencionado, y así en 1921 aparece la Secretaría de Educación Pública.

Algunos de los objetivos de la revolución mexicana fueron que en el texto constitucional apareciera el derecho a la educación como laico (Solana, Cardiel, & Bolaños , 1981), sin dejar de manera precisar la responsabilidad del Estado en proporcionar una educación para todos, o como lo comentaba la autora Ruíz Muñoz (2015), el derecho del individuo a la educación, y en la CPUEM de 1917 es hasta 1934 con la primera reforma que aparece la gratuidad en la educación.

Uno de los compromisos más importantes sobre el derecho a la educación aparece con la reforma al artículo tercero de la CPEUM de 1946 donde el Estado busca “*desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano*”. Este compromiso adquirido por el Estado significaba una gran responsabilidad en relación a los factores que son determinantes para su cumplimiento: “*En el caso concreto del derecho a la educación, su núcleo esencial lo constituyen cuatro derechos: la **disponibilidad** de la educación, el **acceso** a la educación, la **permanencia** en el sistema educativo y la **calidad** de la educación.*” (Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos, 2003).

Entre 1934 y 1980 periodos en los que se realizan la segunda y tercera reforma al artículo tercero de la CPEUM, a nivel internacional existieron acontecimientos de gran relevancia en materia del derecho internacional de los derechos humanos, de los cuales nace la Declaración Universal de Derechos Humanos, y un número importante de Convenciones Internacionales en materia de educación.

Ante estos compromisos que México había adquirido, las reformas realizada entre 1934 y 1980 no eran suficientes para dar cumplimiento a los estándares jurídicos de derechos humanos sobre el derecho a la educación, ni las reformas de 1980 y 1992 realizaron adecuaciones de principios internacionales en el artículo tercero Constitucional.

En la quinta reforma al artículo tercero Constitucional en 1993 se pueden observar elementos importantes en el avance de este derecho, por un lado, que el Estado tenía la responsabilidad de

atender todos los niveles educativos, y el reconocimiento de que *“todo individuo tiene derecho a recibir educación”*. Estos dos preceptos adoptados permiten tener un contexto jurídico más adecuado para la exigibilidad del derecho a la educación en términos individuales.

Con base en el contexto internacional es importante mencionar que en 1994 México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así el Estado Mexicano tuvo la obligación de adoptar las recomendaciones en materia de derecho a la educación, realizando cambios estructurales en la educación básica y las evaluaciones a los maestros (esta última se cristalizaría más tarde con la reforma constitucional), así como las evaluaciones escuelas públicas de nivel básico y medio superior en México (*Programme for International Student Assessment, PISA*). (OCDE, 1997)

Con la reforma del 2002 se establece que: *“Todo individuo tiene derecho a recibir educación”* y se desarrolla en el artículo 31 Constitucional, la obligación de los padres para que sus hijos atiendan a las escuelas públicas o privadas, esta adecuación constitucional además permite tener una visión compartida de la garantía al derecho a la Educación por parte del Estado y los padres de familia, como lo comenta la autora Ruíz Muñoz (2015) que *“Algunos autores coinciden en señalar que, el derecho a la educación ha estado implícito a lo largo de la historia jurídica del país al señalarse la obligatoriedad del Estado y de los padres de proveer educación”*.

En el 2011, la reforma al artículo primero Constitucional da un cambio de paradigma en el Derecho, el cual se aborda de manera inmediata posterior en este mismo segmento, así el artículo tercero Constitucional, el mismo año, no se realiza una reforma de fondo, solamente adecuaciones de redacción jurídica, sin embargo un año posterior en el 2012 se da un avance significativo al momento de establecer que la educación básica y media superior son obligatorias, cuando anteriormente solamente la educación básica se consideraba como obligatoria.

En el año 2013 se realiza una adicción al párrafo tercero, en donde el Estado se compromete constitucionalmente a garantizar la calidad en la educación obligatoria en relación a la infraestructura, los materiales, los métodos educativos, así como la idoneidad de los docentes y directivos. Por otro lado, uno de los pasos más significativos fue la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, bajo la dirección del Instituto Nacional para la Evaluación, órgano que supervisará los preceptos constitucionales para el cumplimiento de este derecho.

El 2016 es la última reforma al artículo tercero Constitucional, en donde evoluciona el término *individuo a persona*, en el reconocimiento de los derechos humanos, los cuales tienen su inicio en la revolución mexicana, con la búsqueda por la igualdad el cual fue uno de los principales objetivos, y posteriormente las reformas que se realizaron no fueron obra de la casualidad, sino de grupos de personas que pugnaban por un contenido jurídico más extenso, claro y favorable para el desarrollo de cada persona.

Aun así, a pesar de las luchas, esfuerzos y trabajo en conjunto, la tarea de armonizar las leyes internas con los estándares y compromisos jurídicos internacionales pactados por México, es un camino importante que debe de ir trazando en el cumplimiento de la reforma constitucional del artículo primero en el 2011.

4.2 REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 2011

La reforma del artículo primero de la CPEUM tuvo un cambio de paradigma muy significativo debido a que anterior a la reforma los alcances de este derecho eran limitados, previamente establecía: “*En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece*”. Es importante identificar cada uno de los elementos que componen este derecho.

Primero, se puede observar que se les denomina *individuos*, que titulares de *garantías*, y que solamente las que otorga la *Constitución*, y que no pueden *restringirse ni suspenderse*, al menos que estén contemplados en el mismo ordenamiento jurídico. Este elemento en relación al artículo tercero de la CPEUM desarrollaba la Obligación del Estado en garantizar lo que contemplará este derecho, dependiendo de su momento histórico en relación a su contenido jurídico, así como se revisó en las diez reformas al derecho a la educación.

La reforma constitucional en México abrió la puerta a un nuevo paradigma en la práctica de los derechos humanos, si bien es cierto que México bajo el principio de *Pacta Sunt Servanda* (Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, 1969), se había comprometido de buena fe a cumplir con lo pactado y que se sometió bajo la competencia contenciosa de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en 1998 (García Ramírez, Huerta, & Iván, 2011); en México existía una pugna sobre la interpretación del estatus jerárquico de los tratados internacionales en donde algunos estudiosos del derecho establecían que estos se encontraban por debajo de la Constitución. Sin embargo, se plasma la redacción completa de la reforma al artículo primero de la CPEUM, para observar las Obligaciones que adquiere el Estado y hacer una comparación con su versión previa la reforma, es así que establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (Const. 1917, reforma al art. 1ro. 2011)

En la misma dinámica, para identificar los elementos jurídicos que constituyen una Obligación para el Estado, se observa lo siguiente: es importante señalar que la redacción del texto Constitucional es totalmente distinta al anterior, así que primero se observa que se cambia el concepto de *individuo* y es reemplazado por *persona*, al mismo tiempo el concepto de *garantías* evoluciona al concepto de *derechos humanos*, y amplía además que no solamente restringe a los derechos Constitucionales, sino que también reconoce los tratados internacionales, con la expresión, y, de forma que integra como parte del mismo Bloque de Constitucionalidad.

Como segundo momento se identifica el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, en donde establece que los *derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales* y adiciona *favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia*, lo que tiene como indicación jurídica atender a la norma que sea más favorable, indistintamente si se encuentra en la Constitución o los tratados internacionales.

Las autoridades tienen cuatro obligaciones, que son *promover, respetar, proteger y garantizar* derechos humanos, cuatro principios *universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad*, y en relación a esto el Estado tiene cuatro deberes, *prevenir, investigar, sancionar y reparar*. Estos conceptos son sumamente importantes a luz del entendimiento del derecho a la educación, debido a que el Estado deberá de actuar bajo sus obligaciones, principios y deberes para garantizar el cumplimiento de su responsabilidad.

Lo anterior expuesto, permite entender que el derecho a la educación debe ser conceptualizado como un derecho humano, que tiene que ser desarrollado con obligaciones, principios y deberes, posteriormente se desarrolla el tema de esclavitud, el cual había sido materia de una reforma anterior, y finalmente la prohibición de toda discriminación.

Así con esta nueva interpretación, se entiende que los tratados internacionales en materia de educación y los cuales se presentaron en el primer capítulo sirven como marco de referencia jurídica sobre la construcción del concepto del derecho a la educación, y forman parte del bloque constitucional. (Rodríguez Manzo, et, al. 2013)

Es decir que a partir de los elementos mencionados que constituyen el derecho a la educación por el artículo tercero Constitucional, con base el principio por persona desarrollado en el artículo primero Constitucional podemos identificar aquellos elementos del derecho internacional que sean más favorables para su interpretación.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece que toda persona tiene derecho a la educación, y en México este concepto se logra hasta el año 2016 con la última reforma constitucional, es decir 68 años después, además reconoce que debe ser gratuita y obligatoria. Y en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 amplía el derecho a la educación en donde reconoce que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, que la educación es obligatoria y

asequible a todos gratuitamente, debe ser generalizada, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

Así como se observa el párrafo anterior estos derechos son retomados y adecuados por México en su artículo tercero constitucional muchos años más tarde, y si bien estos derechos son reconocidos, todavía es necesario continuar armonizando aquellos que no se encuentra configurados en el derecho interno, tal como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 en donde se solicita que los Estados adopten medidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer en la esfera de la educación, así como las condiciones de igualdad en el acceso a la misma.

En el análisis al artículo tercero Constitucional se puede observar que no existe perspectiva de género en su contenido jurídico, y las medidas mencionadas en la LGE no son compatibles con los estándares mencionados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, dejando una tarea importante que realizar en la armonización de este derecho.

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se plantea la falta de acceso y asistencia de los niños a la escuela en donde se contempla la asistencia financiera en casos de necesidad; Sin embargo, estas medidas no tienen un procedimiento específico jurídico que pueda garantizar su cumplimiento, dejando las acciones a prácticas discrecionales, sin fundamentos vinculantes.

Posteriormente los foros internacionales en materia de educación evidenciaron la grave problemática que se presenta para poder garantizar el acceso a este derecho, y al mismo tiempo en el caso de México la reforma Constitucional al artículo primero en el 2011 permite tener un ordenamiento jurídico más amplio que debe de avanzar hacia la transformación jurídica de las atribuciones jurisdiccionales para garantizar el derecho a la educación de una manera efectiva y de acuerdo con los estándares internacionales.

La reforma de la CPEUM en el 2011 a su artículo primero además de consagrar la apertura a la incorporación de los tratados internacionales, y formar parte del Bloque de Constitucionalidad, abre la puerta a la que la interpretación del derecho pueda siempre tener el mayor beneficio para la persona, en este sentido, se deben interpretar las normas.

4.3 REFLEXIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Hasta este momento se ha hablado de grandes acontecimientos históricos, de reformas Constitucionales, de estándares internacionales, de Leyes, sentencia, aportaciones académicas, incluso de teorías que permitan tener una perspectiva más amplia, se retomaron informes de relatores de las naciones unidas, se han analizado opiniones consultivas, y además se ha hecho una reflexión del sistema jurídico mexicano, pero la pregunta continua: ¿Qué es el derecho a la educación?; ¿es acaso el marco jurídico del artículo tercero de la CPUem?; ¿son los tratados internacionales en la materia?; ¿son las interpretaciones jurídicas o las aportaciones de los académicos?, o ¿son un conjunto de la integración de todos estos derechos?

Si bien es cierto, al día de hoy no hemos encontrado un concepto que integre todos los elementos que se mencionan en cada uno de estos ordenamientos jurídicos; Sin embargo, como se comentó en el subcapítulo anterior, si entendemos que deben de ser enfocados de tal forma que se permita la interpretación más amplia y favorable para la persona.

Para entender el derecho a la educación podemos partir de que la perspectiva que se tenía antes de la revolución era limitada y que aun con la CPEUM en 1917 su contenido jurídico era escaso, así los movimientos internacionales que se vieron cristalizados en tratados internacionales en materia de educación, con las reformas del artículo tercero constitucional dieron paso a una metamorfosis jurídica que permitió extender el concepto de este derecho.

Por otro lado, es importante reconocer un significativo grupo de académicos y organizaciones internacionales contribuyeron en la construcción de un derecho más amplio, y que la reforma al artículo primero Constitucional significa una base jurídica de interpretación que permite ampliar el panorama del derecho a la educación.

En este sentido retomando algunas de las posturas que son indispensables para entender la importancia del derecho a la educación Schettino Piña (2005), considera que el derecho a la educación es fundamental para hacer viable la vida humana, y que el Estado debe de garantizarlo, a pesar de las limitaciones económicas. Y si se analiza esta postura, se entiende que la preocupación de Álvarez Mendiola (1995), que sostiene que cuando la sociedad tiene población

que no cuenta con educación básica terminada no se da cumplimiento al derecho humano fundamental a la educación.

Por lo que a no dar cumplimiento al artículo tercero Constitucional se limita el disfrute de otros derechos, a lo que Katarina Tomaševski (2001), Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación considera:

“Muchos derechos individuales, especialmente los asociados al empleo y la seguridad social, están fuera del alcance de quienes han sido privados de educación. La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola ese derecho.”

Entender la concepción jurídica del derecho a la educación como se observa, no se limita a un escrito en el texto Constitucional, más cuando este derecho es susceptible a no ser garantizado, así que las cifras presentadas por la Declaración Universal de Educación para Todos (1990) fueron alarmantes, así mismo, lo es, la carencia de mecanismos jurídicos que permitan hacer viable el derecho cuando este es violentado.

Sin embargo, el impacto de la resolución de expedientes Varios 912/2010 mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló la aplicación del control de convencionalidad-constitucionalidad, existe la obligación de los jueces federales y locales de aplicar este principio, en donde se ha reflexionado que:

La modificación en la morfología del Poder Judicial proviene de la resolución del expediente Varios 912/2010 mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió... que todos los jueces federales y locales independientemente de la cuantía o la materia están obligados a aplicar el control de convencionalidad-constitucionalidad como parte de los mecanismos provenientes del artículo 1o. constitucional. (Vázquez, 2013)

Por otro lado, la UNESCO en 1996, tiene el concepto de la educación como poder, para que las personas puedan desarrollar su potencial, ya que para Katarina Tomaševski (2001) comenta que *“existe pues un gran número de problemas de derechos humanos que es imposible resolver a menos que se considere que el derecho a la educación es la llave que abre paso a otros derechos humanos.”*

En la CPEUM después del proceso de transformación, al día de hoy se puede entender que el derecho a la educación contemplado en el artículo tercero constitucional es el derecho de toda persona recibir educación, que para que este precepto se pueda cumplir además se establece que es responsabilidad del Estado, y que las características que forman parte de este derecho, están encaminadas a desarrollar todas las facultades del ser humano, a través de valores de laicidad, obligatoriedad, democracia, respeto, y que debe de ser de calidad.

Después de las reflexiones que se observan y después de las diez reformas realizadas al artículo tercero constitucional se puede establecer que el derecho a la educación es un derecho que ha evolucionado a través de la historia política, jurídica e internacional, en donde encontramos las pautas que han trazado su constitución jurídica con la colaboración de legisladores, académicos, tratados internacionales y organizaciones que han buscado una mejor interpretación y contenido, y que a partir de la reforma al artículo primero Constitucional, se identifican las obligaciones, principios y deberes del Estado en relación al cumplimiento de este derecho.

4.4 REVISIÓN DE LA LGE A LA LUZ DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

Para entender el presente subcapítulo, es importante entender el significado y alcance de las Obligaciones del Estado, las cuales consisten de acuerdo al artículo primero de la CPEUM, en **respetar, proteger, garantizar y promover**¹⁵ los derechos humanos, en este sentido se debe de entender que estas obligaciones enfocadas al artículo tercero del mismo ordenamiento deben de ser desarrolladas en la LGE, para dar cumplimiento a esta responsabilidad del Estado.

Por otro lado, la UNESCO ha establecido además que *“la obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada uno de los “rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación. La obligación de respetar exige que el Estado eviten tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación.”* (UNESCO, 2017)

En materia constitucional la responsabilidad del derecho a la educación tiene un peso importante desde su concepción axiológica, y que este derecho tiene una base histórica de lucha por la igualdad en México, así es que fue evolucionando y transformándose a través de los años hasta

¹⁵ Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2017. Reforma Junio 2011.

consagrar cuatro principios fundamentales que deben de ser entendidos desde su dimensión individual.

Estos principios que encontramos sobre el derecho a la educación, se identifican cuatro supuestos, primero *“la educación que imparta el estado tendiera a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano”*; segundo, *“...un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”*; tercero, *“será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”*; y cuarto, *“...emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.”*¹⁶

Si se observan cada una de las obligaciones jurídicas derivadas de la materia constitucional y hacemos una comparación con la LGE, se puede percatar que sin bien los elementos que constituyen esta Ley expresan los principios y valores de desarrollo, mejoramiento económico, educación de calidad, y la equidad e igualdad social, no otorgan facultades para procedimientos judiciales para la garantía del derecho a la educación en el capítulo octavo.

En este mismo sentido los tratados internacionales de los que México es parte deben de encontrar reflejados en la LGE y se pueda observar si esta armonizada en relación a estos tratados en relación a los compromisos que México adquirió en la comunidad internacional.

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26 se contempla que: *“Toda persona tiene derecho a la educación”* y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965 en su artículo quinto: *“El derecho a la educación y la formación profesional”*, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 13 se realiza el reconocimiento de toda persona como sujeto de derecho a la educación, el cual se reconoce en México hasta 1993.

En la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 en su artículo décimo se desarrolla el derecho a la educación en comunidades rurales y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para asegurar el derecho en la esfera de la educación, sin embargo para la LGE solamente se contempla en su artículo octavo de

¹⁶ Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2017. Última reforma en 2016.

manera generalizada que la educación se orientara en un gran número de supuestos, incluyendo *“la discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres y niños”* y el artículo trigésimo tercero contempla medidas sobre el abandono escolar de las mujeres y el desarrollo de programas con perspectivas de género solamente en grupos y regiones con rezago educativo, de tal forma que para tener un avance significativo en la materia todavía hace falta un largo camino por recorrer.

En 1989 a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 28 y 29 reconocen el derecho del niño a la educación en igualdad y la enseñanza superior accesible para todos, un año después en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Tailandia en 1990, se considera que la falta de garantizar el derecho a la educación son graves violaciones a derechos humanos, reconociendo la educación como un derecho fundamental para todas. En este mismo sentido un importante número de conferencias y foros internacionales han pugnado por la importancia de derecho a la educación, así considerado por diferentes académicos e investigadores, es un derecho que funge como agente multiplicador para el cumplimiento de otros derechos.

Aterrizando los supuestos jurídicos constitucionales y convencionales se puede observar que la LGE tiene un mínimo de atribuciones jurídicas para dar cumplimiento al extenso concepto del derecho a la educación, el cual es integrado por la interpretación de ambos criterios legales de acuerdo con el artículo primero constitucional.

Así mismo si se observa la LGE desde una perspectiva de la teoría Neoconstitucional, se puede aseverar que no se ha incorporado la literatura jurídica que se ha señalado en el presente trabajo sobre la importancia de garantizar del derecho a la educación, a través de órganos de impartición de justicia.

Así el gran reto se convierte en la reforma a la LGE para dotar de contenido sobre la garantía de los derechos que puedan ser reclamados por los ciudadanos, debido a que el derecho a la educación, no se limita al sistema educativo en sí mismo, si no que el Estado debe de buscar todas las alternativas posibles para alcanzar el desarrollo planteado en las leyes como se establece el texto constitucional y los tratados internacionales.

De manera general y analizados cuatro temas de gran relevancia para el presente trabajo, se entiende que la reflexión sobre la construcción de un derecho más apegado a cumplir las garantías de derechos humanos a las personas, es el derecho a la educación, uno de los factores determinantes

para el cumplimiento de otros derechos, y la conceptualización de este, así como la creación de leyes que permitan avanzar hacia una aplicación efectiva permitirá crear condiciones favorables en el cumplimiento de las Obligaciones.

CONCLUSIONES

La pugna internacional por el cambio del derecho a la educación en todo el mundo, ha sido una tarea muy compleja que se ha construido con el paso del tiempo, y con el gran esfuerzo por quienes realmente han estado preocupados porque la garantía del derecho a la educación sea real.

Desde el inicio del presente trabajo se estableció la pregunta de investigación, que planteaba ¿Cómo se ha desarrollado el derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano y cuál es su alcance?, para dar respuesta a esta pregunta se desarrolló un estudio de las diez reformas que ha sufrido el artículo tercero CPEUM desde su génesis en 1917, y hasta su última adecuación en el 2016, el cual ha sido de gran avance y con un significado muy importante para los progresos jurídicos para las sentencias de los tribunales mexicanos que recién han empezado a pronunciarse sobre violaciones al artículo tercero Constitucional.

Además esta pregunta está constituida por dos elementos, el primero cómo y el segundo cuál, en el cómo se visualizan las reformas al artículo tercero de la CPEUM, y al artículo primero del mismo ordenamiento, el cual permitió la integración de los tratados internacionales, sin embargo este segundo supuesto responde más a la pregunta de ¿cuál es su alcance?, de tal forma que el alcance tiene su fundamento en la interpretación de los tratados internacionales, es decir que cambia su configuración limitativa al texto Constitucional, y permite una apertura más extensa.

Por otro lado, en el mismo sentido a esta segunda pregunta de investigación, se observa que no solamente se cuenta con dos ordenamientos de interpretación jurídica del derecho a la educación, sino que además, con una perspectiva **teórica neoconstitucionalista**, y las bases jurídicas de tribunales internacionales, se puede analizar sentencias, doctrina y estándares internacionales derivados de los compromisos adquiridos por México bajo el principio de *Pacta Sunt Servanda*, y de acuerdo a la interpretación más favorable, derivada del artículo primero Constitucional.

El planteamiento de Objetivo General de “conocer el génesis y evolución jurídica del derecho a la educación desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 hasta la Reforma del artículo primero Constitucional en el 2011” fue el ingrediente principal de durante todo el documento estuvo presente, quedando satisfactoriamente desarrollado.

De manera puntal los Objetivos Específicos, se fueron desarrollando en cada uno de los capítulos, en el objetivo número uno sobre “hacer una revisión de las reformas y elementos del artículo tercero constitucional como conceptos rectores del derecho a la educación”, en el primer capítulo se abre paso a entender cómo se encontraba configurado el derecho a la educación antes de la Revolución, en la Constitución Federal de México de 1857, legislación vigente antes de la CPEUM de 1917, así que con la configuración del artículo tercero del mismo ordenamiento, se dio paso al análisis de cada una de las reformas desde 1934 hasta el 2016.

Los resultados obtenidos de este primer objetivo, fue reconocer la forma en la que fue evolucionado el derecho a la educación en materia constitucional, de tal forma que las Obligaciones que adquiría el estado en esta materia, formaban una concepción de este derecho con diferentes características en cada momento determinado de la historia en cada una de las reformas.

En el objetivo número dos, “hacer una recopilación de los instrumentos internacionales que versan sobre el derecho a la educación y que son vinculantes para el Estado Mexicano”, de igual forma, es relevante mencionar que debido al *Principio de Pacta Sunt Servanda*, la interpretación de los tratados internacionales, el Estado Mexicano tenía que cumplirlos de buena fe, ante la comunidad internacional, sin embargo ante la revisión y comparación de las Leyes mexicanas con las responsabilidades adquiridas, se puede visualizar de la armonización de los Tratados Internacionales se dieron de manera posterior y de manera lenta, incluso al día de hoy, de la reflexión realizada se denota que todavía existe un gran trabajo en la materia.

Sin embargo, es importante mencionar, que los principales tratados y convenciones en materia educativa fueron entre 1948 y 1990, de tal forma que la reforma al artículo primero de la CPEUM en el 2011, trajo un avance muy significativo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en el derecho a la educación un significativo avance en el fortalecimiento de su aspecto jurídico de interpretación.

El objetivo número tres contempla “revisar las propuestas y estudios realizadas por académicos mexicanos sobre el derecho a la educación” por lo que en el capítulo primero se analizan los textos en materia de derecho a la educación que desarrollaron Castrejón Diez (1978), Álvarez Mendiola (1995), Madrazo Cuellar y Beller (1995), Bolaños Guerra, (1996), Aguilar Sahagún (2001), Schettino (2003), y María Mercedes Ruíz Muñoz (2015), a quienes agradezco sus aportaciones

que fueron de gran valor para el presente trabajo, al mismo tiempo a lo largo del documento la contribución de Katarina Tomasevski (2014) fue muy importante, debido a que su pasión por el derecho a la educación se contagia, y tienes la certeza de entender, como lo menciona la autora, la educación es la llave que abre la puerta a otros derechos.

Para entender el derecho a la educación desde una visión conceptual, internacional además fue fundamental los textos de Edmundo Escobar (1982), Alexy (1993), Aguilar Sahagún (2001), Abramovich & Courtis (2002), Dworkin (2006), Basave (2011), Carbonell (2011) y Atienza (2014), quienes permiten obtener elementos, desde diferentes perspectivas, sobre la importancia de conceptualizar el derecho.

El objetivo número cuatro “realizar un estudio sobre cómo se ha ejemplificado el derecho a la educación en los tribunales en México a partir de un constitucionalismo contemporáneo local e internacional”, se rescataron algunos casos de la Corte IDH tales como las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, y el Instituto de Reeducción del Menor vs. Paraguay, en donde la Corte establece la importancia del desarrollo de este derecho, sin embargo como se precisó en el capítulo correspondiente, que un largo camino para la Corte IDH para garantizar los derechos sociales y entrar al análisis de fondo del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como el Tribunal Europeo lo ha realizado en casos como Folgero y otros vs. Noruega y el caso de Tarantino y otros vs. Italia.

Así mismo con base en la reforma del artículo primero de la CPEUM en el 2011, los tribunales han México han ampliado su criterio frente a las violaciones de los derechos sociales, tales como el derecho a la educación en donde en tres casos han entrado al estudio y dos de ellos ya con sentencias favorables en la protección del derecho a la educación, estos casos son el Amparo en Revisión 323/2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso 19/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo 1302/2013 juzgado octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Además de reflexionar que la violación de este derecho se encuentra vinculado con otros derechos de protección.

En el quinto y último objetivo “hacer una revisión del contenido y las facultades de la Ley General de Educación en contraste con el artículo tercero constitucional y los tratados internacionales en la materia” se da respuesta en el capítulo tercero y en el último subcapítulo del capítulo cuarto en

donde se revisan los antecedentes y la composición jurídica de la LGE en el capítulo tercero y la revisión de la LGE a la luz de las obligaciones del estado, en el subcapítulo 4.4 del capítulo cuarto.

De tal forma que para determinar la hipótesis del presente trabajo se realizó un trabajo exhaustivo de cada uno de los objetivos en relación al objetivo general, que pretendía conocer el génesis y evolución del derecho a la educación en el sistema jurídico mexicano.

La hipótesis planteada establece que: “el desarrollo del derecho a la educación ha sufrido una transformación significativa que ha dado paso a interpretaciones más amplias a través de las aportaciones de las reformas constitucionales al artículo tercero y a partir de la incorporación de tratados internacionales por la reforma del artículo primero constitucional en el 2011, pero limitado en las facultades jurídicas de la Ley General de la Educación.

De tal forma que se puede observar que se cumple la hipótesis, debido a que, primero el derecho a la educación ha sufrido una transformación significativa a través de las reformas constitucionales; segundo, las interpretaciones más amplias tienen su punto de partida en la reforma al artículo primero de la CPEUM en el 2011 y a la **Teoría Neoconstitucional**; y tercero y último, la LGE todavía carece de facultades jurídicas frente a la nueva concepción del derecho a la educación, en donde el Estado tiene Obligaciones, Principio y Deberes frente al artículo tercero de la CPEUM, y en relaciones a las aportaciones jurídicas de órganos jurisdiccionales tanto locales como internacionales.

Desafortunadamente los retos que están pendientes para un cumplimiento apegado a la legalidad tanto constitucional como convencional, queda un largo camino por recorrer, en la construcción de medios jurisdiccionales que permitan hacer asequible este derecho.

PROPUESTAS

La Ley General de la Educación frente a los diferentes aspectos jurídicos que hemos analizado, se pueden observar aspectos importantes que deben formar parte del sistema jurídico mexicano a través de esta Ley. Primero es importante señalar que el compromiso que el Estado Mexicano ha adquirido a través de la firma de sus tratados internacionales, deben de ser armonizados con los instrumentos jurídicos del ámbito interno en relación al derecho a la educación, tal como lo establece el artículo segundo de la CADH, y el principio de *Pacta Sunt Servanda* contemplado en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados.

Para dotar de contenido jurídico a la Ley General de la Educación, se necesita un nuevo ordenamiento jurídico que realmente tenga un impacto en el cumplimiento de los preceptos constitucionales analizados.

Es así que a pesar de las reformas constitucionales y la importancia del derecho a la educación desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 hasta un gran número de tratados y conferencias internacionales en la materia, fue hasta 1993 la aparición de la LGE, la cual carece de elementos jurídicos, como se mostrado en su análisis, que pueda tener un contenido jurídico que permita una interpretación para hacer justiciable este derecho, y si bien es cierto que existen otros recursos jurídicos que han permitido su justiciabilidad, como los casos que fueron desarrollados en el capítulo segundo, es importante reconocer que en muchas circunstancias las personas carecen de un recurso efectivo de acceso a la justicia.

Lo anteriormente mencionado permite entender la importancia de tener una LGE que, en lugar de tener una estructura organizacional, también el concepto del derecho a la educación sea ampliado hacia las formas jurídicas que permitan desarrollar el cumplimiento de este derecho, a través de su axiología.

Por otro lado la tarea de adecuar elementos jurídicos que son indispensables para el derecho a la educación, como es la perspectiva de género, contemplada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1969 y la Declaración Mundial de Educación para Todos de 1990, en la cual se destaca la problemática sobre el acceso y permanencia a la educación por parte de mujeres y niñas, es otra tarea indispensable por desarrollar, a través de la armonización del artículo tercero de la CPEUM y la revisión de la LGE.

Además, en relación a la justiciabilidad del derecho a la educación, bajo el análisis de la Teoría Neoconstitucional y su visión de principios y valores comprendidos en una interpretación más amplia del derecho y más favorable para las personas, no ha permeado el sistema jurídico mexicano, y la LGE no contempla mecanismos jurídicos que puedan hacer justiciable este derecho desde una visión teórica y conceptual del derecho a la educación.

En este sentido el trabajo por desarrollar en relación al derecho a la educación consagra una obligación para el Estado y la sociedad en general, debido a que no basta con quedarnos sentados a que se den los cambios jurídicos que México necesita para el desarrollo de sus derechos, sino que debemos ser agentes de cambio promotores de transformaciones constitucionales que permitan el acceso a la justicia para el cumplimiento de los derechos humanos.

En la parte final de las conclusiones nos queda reflexionar el verdadero concepto del derecho a la educación en México, en donde encontramos un compendio de leyes nacionales e internacionales que ha establecido una definición, la cual se ha retomado en todo el documento, en donde se ha expresado un derecho, de una persona, con una gran cantidad de características, frente a la obligación de un Estado.

Su composición jurídica la encontramos en la CPEUM en su artículo tercero, el cual fue reformado en diez ocasiones, y su extensión en los tratados internacionales en la materia por facultad del artículo primero de la CPEUM, así como su extensión normativa en la LGE, y recientemente en la facultad de los tribunales de emitir sentencia relacionadas al derecho a la educación.

Finalmente podemos decir, que el concepto del derecho a la educación, es la conformación de la interpretación más amplia y favorable para persona, en la cual es importante retomar todos los preceptos que se encuentran contemplados en los instrumentos mencionados en el párrafo anterior, entendiendo que en el artículo tercero de la CPEUM, después de la última reforma se establece que “toda persona tiene derecho a recibir educación”, bajo criterios que señalan que la educación obligatoria, infraestructura educativa adecuada, idoneidad en los docentes, desarrollado con una serie de valores y respeto, calidad, la gratuidad, las obligaciones del Estado, la responsabilidad del Congreso de la Unión de expedir y modificar las leyes necesarias.

Si bien es cierto en el artículo tercero de la CPEUM, encontramos un desarrollo muy oportuno del reconocimiento de los derechos que asisten a las personas en materia de educación, sin embargo,

la tarea de poder dar cumplimiento a este derecho, dependerá de la restructuración de un sistema educativo que pueda dar cumplimiento a este derecho.

Bibliografía

- Abramovich, V., & Courtis, C. (2002). *Los Derechos Sociales como Exigibles*. Madrid: Trotta.
- Aguilar Sahagún, L. A. (2001). La educación como objeto de derecho. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XXXI(4), 99-110.
- Alexy, R. (1993). *Teroría de los derechos fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Álvarez Mendiola, G. (1995). La escolaridad básica como derecho humano en México. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XXV(2), 83-101.
- Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. *Resolución 217 A (III)*. Paris, Francia.
- Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (21 de Diciembre de 1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. *Resolución 2106 A (XX)*.
- Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (18 de Diciembre de 1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer . Nueva York, Estados Unidos de América .
- Atienza, M. (2014). *Curso de Argumentación Jurídica*. Madrid, España: Trotta.
- Basave, A. (2011). Fundamento y Esencia del Derecho Natural. En *Filosofía del Derecho Internacional*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1056/7.pdf>
- Bolaños Guerra, B. (1996). *El derecho a la educación*. México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
- Camara de Diputados LX Legislatura. (2007). *APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Estudio de antecedentes, Derecho Comparado y de las iniciativas presentadas a nivel Constitucional sobre el tema. (Actualización)*. México.
- Carbonell, M. (2011). *Los Derechos Fundamentales en México. Capítulo Quinto Los Derechos Sociales*. México: Porrúa.
- Carbonell, M., & García Jaramillo, L. (2010). *El Canon Neoconstitucional*. México: Trotta.
- Caso Comunidad Indígena Yakyé Axa vs. Paraguay (Corte Interamericana de Derechos Humanos 17 de Junio de 2005).
- Caso de las niñas Jean y Bosico vs. República Dominicana (Corte Interamericana de Derechos Humanos 8 de Septiembre de 2005).
- Castrejón Díez, J. (1978). *El derecho social a la educación. Una visión del futuro*. México: Porrua.

- Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL). (2008). *Informe de Brasil: situación presente de la educación de jóvenes y adultos en Brasil*. . México: CREFAL.
- Centro de Estudios Educativos (CEE). (1993). Comentario a la Ley General de la Educación. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, XXIII(2), 5-8.
- Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. (2015). *Evaluación del gasto educativo en México*. México: Cámara de Diputados, LX Legislatura.
- Collin, L. (1999). *PERSONAJES HISTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA TRANSFORMADOS EN HEROES CULTURALES Y GEMELOS MITICOS* (Vol. XIV). (e. C. Red de Revistas Científicas de América Latina, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Mitológicas, Centro Argentino de Etnología Americana.
- Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. (1990). *Observación General Número 3 "El índole de las Obligaciones de los Estados Parte"*. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. (del 5 al 9 de Marzo de 1990). Declaración Mundial de Educación para Todos. *Marco de Acciones para Satisfacer las Necesidades de Aprendizaje*. Jomtien, Tailandia.
- CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (22 de Marzo de 2017). DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. *Reforma a la Ley General de Educación*. México.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 [Const.]. (10 de Junio de 2011). Artículo 1ro. Constitucional . *Reforma*. México.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917 [Const.]. (29 de Enero de 2016). Reforma al artículo 3ro. . México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (1857). Artículo 3ro. *Titulo I. Sección I de los derechos del hombre*. México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (5 de febrero de 1917). Artículo 3ro. *Titulo I. Capitulo I. De las Garantías Individuales*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (13 de diciembre de 1934). Reforma al artículo tercero. México: Diario Oficial de la Federación.
- Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (30 de Diciembre de 1946). Reforma al artículo 3ro. México: Diario Oficial de la Federación.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const.]. (9 de Junio de 1980). Reforma al artículo 3ro. . México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (28 de Enero de 1992). Reforma al artículo 3ro. . México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (12 de Noviembre de 2002). Reforma al artículo 3ro. México: Diario Oficial de la Federación .

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (10 de Junio de 2011). Reforma al artículo 3ro. . México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (9 de febrero de 2012). Reforma al artículo 3ro. . México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (26 de Febrero de 2013). Reforma al artículo 3ro. México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917 [Const.]. (26 de Febrero de 2013). Reforma al artículo 73. México: Diario Oficial de la Federación .
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 [Const.]. (5 de Marzo de 1993). Reforma al art. 3ro . México: Diario Oficial de la Federación .
- Contradicción de Tesis, 293/2011, 293/2011 (Suprema Corte de Justicia de la Nación 24 de Junio de 2011).
- Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. (23 de Mayo de 1969). Artículo 26. *PARTE III. Sección Primera. Observancia de los Tratados*. Viena, Austria: Organización de las Naciones Unidas.
- del Toro Huerta, M. I. (2012). *a Declaración Universal de Derechos Humanos: un texto multidimensional*. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos .
- DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, 293/2011 (Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Abril de 2014).
- DWORKIN, R. (2006). *Justice in Robes*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Escobar, E. (1982). El Derecho Educativo. El Derecho de la Educación o el Derecho en la Educación. En U. N. México, *Memorial del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social*. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- García Ramírez, S., Huerta, d. T., & Iván, M. (2011). *México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de jurisprudencia*. México: a Sergio García Ramírez. Mauricio Iván del toro huerta. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2607/4.pdf> .
- González Placencia, L. A. (2011). La investigación en derechos humanos como imperativo ético de nuestro tiempo. A propósito de la aparición de la revista *methodos*. Obtenido de <http://revistametodhos.cdhsf.org.mx/phocadownload/03-08%20luis%20metodhos.pdf>
- Guichard, S. (2005). *The Education Challenge in Mexico: Delivering Good Quality Education to All*. OECD Economics Department Working Papers 447, Paris.
- INEE. (2010). *Resumen del Informe El Derecho a la Educación en México*. México: INEE.
- Instituto de Reeducción del Menor v. Paraguay , Serie C No. 112 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 de septiembre de 2004).
- Kapelusz-Poppi, A. M. (2007). Educación socialista, modernización científica y organización sindical durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940). En P. U. Letras., *Temas de*

- Historia Argentina y Americana* (pág. 129). Buenos Aires, Argentina: Instituto de Historia Argentina y Americana.
- Macías Barba, M. d. (julio-diciembre de 2011). José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Historia, trayectoria y vocación común . (e. C. Red de Revistas Científicas de América Latina, Ed.) *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 33(2), 9.
- Madrazo Cuellar , J., & Beller , W. (1995). Consideraciones sobre el derecho a la educación y la educación superior en México desde la perspectiva de los derechos humanos. *Revista Universidad Futura*, 7(19), 84-93.
- México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas. . (2011). *10 puntos para entender el gasto educativo en México: Consideraciones sobre su eficacia*.
- Morelos Macouzet, C. (2016). Gasto y calidad Educativa desde una persepectiva internacional . En A. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, *Gasto Público para una Educación de Calidad* .
- Moreno Cruz, R. (Julio-dicimebre de 2010). Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*(23).
- Núñez Carpizo, E. (2010). El positivismo en México: impacto en la educación. En C. O. Mexicana, *Independencia a 200 años de su inicio. Pensamiento Social y Jurídico* (pág. 377). México: Facultad de Derecho, UNAM.
- OCDE. (1997). *Exámenes de las políticas nacionales de educación. México*. Paris: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
- OECD. (2007). *ducation at a Glance: OECD Indicators*. Paris.
- Olivares Alonso, E. (1 de abril de 2014). INEGI: en planteles básicos, 25 millones de alumnos y dos millones de trabajadores. *La Jornada*. Obtenido de <http://www.jornada.unam.mx/2014/04/01/sociedad/033n1soc>
- Opinión Consultiva OC-17/02, OC-17/02, Párrafo 82 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 28 de agosto de 2002).
- Organización de las Naciones Unidas. (1992). Agenda 21. Rio de Janeiro, Brasil .
- Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura. UNESCO. (25 de Septiembre de 1996). Afirmación de Amman. *INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA APROBADO POR LA CONFERENCIA GENERAL*. Paris.
- Organización de los Estados Americanos. (7 al 22 de Noviembre de 1969). Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José. San José, Costa Rica.
- Pablo Enrique Torres Gutiérrez y José Prieto Restrepo c. Instituto Ginebra La Salle, T-147493 (Tribunal Supremo de Colombia, 24 de Marzo de 1998).
- Ponce de León Armenta, L. (1996). *La Metodología de la Investigación Científica del Derecho*. México: Jurídicas Unam. Obtenido de <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/205/dtr/dtr4.pdf>

- Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Humanos. (2003). *El Derecho a la Educación. En la Constitución, la Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales*. Bogotá: Defensoría del Pueblo. Obtenido de <http://www.corteidh.or.cr/tablas/24868.pdf>
- Rodríguez Manzo, G., Arjona Estévez, J., & Fajardo Morales, Z. (2013). *Bloque de Constitucionalidad en México*. México.
- Ruíz Moreno, Á. G. (2012). *Desarrollo y Derechos Sociales Exigibles* (12va. ed.). México: CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSITARIOS.
- Ruíz Muñoz, M. M. (2015). *Derechos a la Educación: Política y Defensa de la escuela Pública*. México: Universidad Iberoamericana.
- Schettino Piña, A. (2005). *El derecho a la Educación*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Schettino Piña, A. (2005). *El Derecho a la Educación*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/241/art/art10.pdf>
- Schettino, A. (2003). El derecho a la Educación. *Revista de la Facultad de Derecho de México*(241), 243-276. Obtenido de www.juridicas.unam.mx
- Sentencia , C-225 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1995).
- Solana, F., Cardiel, R., & Bolaños , R. (1981). *Historia de la Educación Pública en México*. México: Fondo de Cultura Económica USA.
- Terrazas, C. R. (1993). *Universidad Nacional Autónoma de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Tomaševski, K. (2001). *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Informe anual de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación*. Comisión de Derechos Humanos.
- Tomasevski, K. (julio-diciembre de 2014). Indicadores del Derecho a la Educación. *Revisa Instituto Interamericano de Derechos Humanos*.
- UNAM. (1981). *Antología de Benito Juárez*. México: UNAM.
- UNESCO. (2017). *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura* . (O. d. Estado, Productor) Recuperado el 23 de Abril de 2017, de <http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/normative-action/state-obligations/>
- Universidad Abierta. (09 de Mayo de 2012). LA LEY GENERAL DE EDUCACION, REFORMAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. *Universidad Abierta*, 51. Obtenido de <http://universidadabierta.edu.mx/revista/LaLeyGeneralDeEducaci%F3n.pdf>
- Vázquez, D. (Octubre de 2013). Los límites de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México: por un poder político desconcentrado. *ISONOMÍA, Revista de Filosofía y Teoría del Derecho*(39).

Vazquez, D. y. (2012). *Fundamentos teóricos para la metodología aplicada a los derechos humanos*. Programa de Capacitación y Formación de Derechos Humanos.

Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en la sentencia Suárez Peralta Vs. Ecuador (Corte Interamericana de Derechos Humanos 21 de mayo de 2013).